

PERIODO 122°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

24^a REUNION – 19^a SESION ORDINARIA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2004

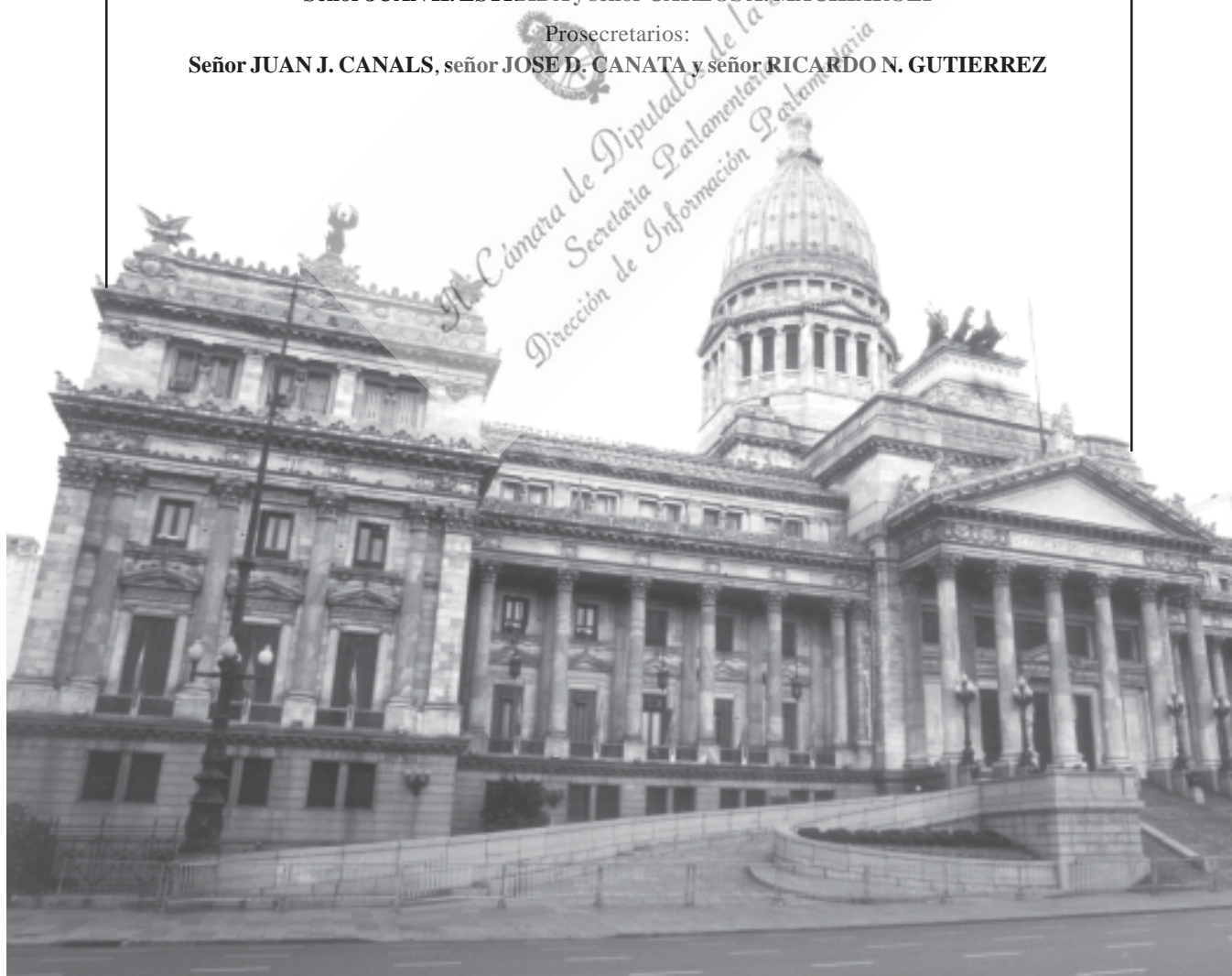
**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don
DANIEL O. SCIOLI, y del señor presidente provisional
del Honorable Senado, doctor MARCELO A. H. GUINLE**

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ARANCIO, Lylia M.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAR, Graciela Y.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARROS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 COLOMBO, María T.
 CONTI, Diana
 DANIELE, Mario D.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLEGO, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GUINLE, Marcelo A. H.
 ISIDORI, Amanda M.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LESCANO, Marcela F.
 LOSADA, Mario A.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTINAZZO, Luis E.
 MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MENEM, Eduardo
 MERA, Mario R.
 MORALES, Gerardo R.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.

OCHOA, Raúl E.
 PAZ, Elva A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PINCHETTI, Delia N.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 URQUÍA, Roberto D.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María E.
 CURLETTI, Mirian B.
 ESCUDERO, Sonia M.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 IBARRA, Vilma L.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.
 MIRANDA, Julio A.
 MÜLLER, Mabel H.
 OVIEDO, Mercedes M.
 TAFFAREL, Ricardo C.

AUSENTE POR ENFERMEDAD:

MARTÍN, Floriana N.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. .)
2. Homenaje al doctor Hipólito Yrigoyen, con motivo de haberse cumplido un nuevo aniversario del golpe militar del 6 de septiembre de 1930 (S.-2.860/04). Se aprueba. (Pág. .)
3. Homenaje al doctor Germán Bidart Campos con motivo de su reciente deceso (S.-2.834, 2.843, 2.859, 2.907, 2.923, 2.930 y 2.950/04). Se aprueba. (Pág. .)
4. Homenaje con motivo de cumplirse mañana el 30º aniversario del fallecimiento de quien fuera vicegobernador por la provincia de Córdoba, Atilio López (S.-2.968). Se aprueba. (Página .)

5. Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento con motivo de celebrarse el 11 de setiembre el Día del Maestro (S.-2.766, 2.805, 2.858, 2.375 y 2.553/04). Se aprueba. (Pág. .)
6. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos. (Pág. .)
7. Lectura y aprobación del plan de labor. (Página .)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se declare de interés nacional la modernización del puerto de Diamante, Entre Ríos (S.-1.800/04). Se aprueba. (Pág. .)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el

- Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento a la trayectoria de la escultora Teresa Farga de Corominas (S.-1.115/04). Se aprueba. (Página .)
118. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori el que se declara de interés científico el hallazgo de miles de restos fósiles de huevos de dinosaurios en Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio de Río Negro (S.-3.471/03). Se aprueba. (Pág. .)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras Conti e Ibarra por el que se declara de interés del Honorable Senado de la Nación el proyecto de la Municipalidad de Coronel Moldes, Córdoba, para la creación de los talleres de oficios “Agustín Tosco” (S.-3.021/03). Se aprueba. (Pág. .)
120. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y del señor senador Pichetto por el que se declara de interés la designación de Río Negro como sede de la región patagónica para la selección de artesanías que concursarán en el Premio UNESCO 2004 (S.-2.938/03). Se aprueba. (Pág. .)
121. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín, por el que se solicita se incluya a las pensiones graciables en el aumento de haberes dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional (S.-2.625/04). Se aprueba. (Pág. .)
122. Consideración del dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (S.-110 y 1.494/03; 291, 1.091, 1.137, 1.330 y 1.391/04). Se aprueba. (Pág. .)
123. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores sobre concesiones de energía geotérmica (S.-391/03). Se aprueba. (Pág. .)
124. Consideración sobre tablas del proyecto unificado por el que se expresa pesar ante el acto perpetrado por el terrorismo en una escuela de Beslan, Osetia del Norte, Rusia (2.808, 2.810, 2.911, 2.920, 2.930, 2.940, 2.981, 2.916 y 2.925/04). Se aprueba. (Pág. .)
125. Manifestaciones. (Pág. .)
126. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Colombo por el que se declara de interés parlamentario el II Congreso Nacional de Políticas Sociales (S.-2.309/04). Se aprueba. (Pág. .)
127. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y otros señores senadores por el que se solicita apoyo para paliar efectos del sismo ocurrido en la provincia de Catamarca (S.-2.836/04). Se aprueba. (Pág. .)
128. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara a Puerto Pirámides como capital nacional de actividades turísticas de avistaje marino y capital nacional de la ballena (S.-2.915/04). Se aprueba. (Pág. .)
129. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que se declara de interés del Senado a la Expo Rural 2004 “San Luis Productiva” (S.-2.945/04). Se aprueba. (Página .)
130. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de los senadores Fernández de Kirchner y Yoma por el que se faculta al presidente del Honorable Senado de la Nación a efectuar la designación de los señores senadores que integrarán la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confec-ción del Digesto Jurídico Argentino (S.-2.743/04). Se aprueba. (Pág. .)
131. Apoyo para paliar efectos del sismo en Catamarca (Continuación) (Pág. .)
132. Consideración si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los senadores Conti y Rossi, a través del cual se declara de interés del Senado el 26 de setiembre de este año, fecha en la que el pueblo de General Moldes cumple cien años (S.-2.786/04). (Pág. .)
133. Consideración si se trata sobre tablas del proyecto de ley de la señora senadora Giusti por el que se instituye el 25 de septiembre como Día Nacional de la Ballena y de las Actividades Turísticas de Avistaje (S.-2.914/04). (Página .)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

121

PENSIONES GRACIABLES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora Avelín, por el que se solicita se incluya a las pensiones graciables en el aumento de haberes dispuesto por el PEN.

Se va a votar el tratamiento sobre tablas.

- La votación resulta afirmativa.
- El texto es el siguiente:

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya en el aumento de haberes dispuesto para las jubilaciones y pensiones a aquellas pensiones graciables que jamás recibieron aumento y que en su mayoría perciben haberes de menos de \$100 (cien pesos), estando comprendidas en las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y 25.401.

Nancy B. Avelín.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Mediante los decretos 391/03 y 1.194/03 el Poder Ejecutivo nacional dispuso un incremento para las pensiones graciables otorgadas entre los años 1984 y 1996 inclusive; quedando sin ningún aumento las pensiones otorgadas desde 1997 al 2001 (leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y 25.401).

A fin de reparar esa inequidad el Honorable Congreso de la Nación sancionó en la Ley de Presupuesto Nacional 2004 (ley 25.827), el artículo 57 incluyendo el siguiente texto: “Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764, 24.938, 25.064, 25.237 y 25.401, con el objeto de equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado del decreto 391/03” siendo posteriormente vetado por el Poder Ejecutivo en el decreto 1.290/03.

Sin embargo el Poder Ejecutivo vetó la facultad de equiparar los aumentos de pensiones que el Congreso le había autorizado por lo que hasta la fecha se mantiene la situación de inequidad con este gru-

po de pensiones graciables que no recibió aumento alguno.

Este Senado debe manifestarle al Poder Ejecutivo, la voluntad de sus miembros de reparar este acto de inequidad, en un tema tan sensible e importante para nuestra sociedad.

En un momento de bonanza en la recaudación tributaria y como contrapartida a la grave crisis económica tan severa para los más humildes, resulta absolutamente impostergable para este sector tan débil, incrementar las pensiones graciables, que no fueron alcanzadas por los decretos de aumento 391/03 y 683/04 del Poder Ejecutivo nacional.

Cabe destacar que se trata de pensiones que en el 80 % de los casos cobran haberes inferiores a \$ 100, siendo el haber máximo de \$ 300.

Es este un tema de estricta justicia y sana equidad ya que no existe ninguna razón para desconocer el derecho de estos beneficiarios de pensiones graciables a alcanzar el mismo haber que los comprendidos en los decretos mencionados.

No puede ser que ninguna figura jurídica ni ecuación económica consagre un acto de injusticia tan elocuente, es por eso que es imprescindible que el Poder Ejecutivo nacional incluya en el decreto 683/04 los aumentos previstos a este sector de beneficiarios de pensiones graciables a partir de septiembre.

Por todo lo expuesto solicito de mis pares el tratamiento y sanción de este proyecto.

Nancy B. Avelín.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- La votación resulta afirmativa.
- En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

122

REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de ley.

Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito que se habilite el tratamiento sobre tablas de los proyectos contenidos en los expedientes S.-2.914/04 y S.-2.915/04, que obran en Secretaría Parlamentaria.

Sr. Presidente. – Previamente corresponde considerar el Orden del Día N° 619, dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 619.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de ley del señor senador Luis Falcó y otros (S.-110/03) sobre Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo; del señor senador Jorge Capitanich (S.-1.494/03) estableciendo un subsidio para consumidores de gas en garrafas en particular para la provincia de Chaco; del señor senador Marcelo Guinle (S.-291/04) sobre régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo; del señor senador Rubén Giustiniani (S.-1.091/04) declarando servicio público la producción, comercialización y distribución de gas licuado de petróleo; de las señoras senadoras Mirian Curletti y Alicia Mastandrea (S.-1.137/04) sobre régimen regulatorio para el desarrollo comercial de la industria del gas licuado de petróleo; del señor senador Marcelo López Arias (S.-1.330/04) estableciendo una tarifa de referencia para las garrafas y cilindros de gas; y, de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto (S.-1.391/04) implementando en todo el país el programa “garrafa social”; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° – *Objeto.* La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.

Art. 2° – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) GLP –gas licuado de petróleo–: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus

isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan y comercializan en estado líquido bajo presión;

- b) Productor: toda persona física o jurídica que obtenga gas licuado a partir de la refinación de hidrocarburos líquidos o de la captación o separación del gas licuado de petróleo a partir del gas natural por cualquier método técnico;
- c) Importador: toda persona física o jurídica que importe GLP para comercializarlo en el mercado interno;
- d) Fraccionador: toda persona física o jurídica que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia marca o de terceros, conforme surge de la presente ley;
- e) Transportista: toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento, distribución o comercialización o entre ellos;
- f) Distribuidor: toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado o a granel;
- g) Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, consumidores finales o a terceros;
- h) Almacenador: toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
- i) Prestador de servicios de puerto: toda persona física o jurídica que preste servicios de almacenaje, despacho, etcétera, vinculados a actividades o instalaciones portuarias;
- j) Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
- k) Centro de canje: toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3° – *Ambito de aplicación.* Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, dis-

tribución, servicios de puerto y comercialización de GLP en el territorio nacional.

Art. 4° – *Sujetos activos*. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.

Los responsables de la distribución de GLP por redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se registrarán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.

Art. 5° – *Interés público*. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del GLP son declaradas de interés público, en función de los objetivos señalados en el artículo 7° de la presente ley.

Art. 6° – *Libre ejercicio de la actividad*. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la seguridad pública.

Art. 7° – *Política general en la materia*. Fíjese los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:

- a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
- b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de aplicación;
- c) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes;

d) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;

e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;

f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado;

g) Propender a la diversificación del uso del GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8° – *Autoridad de aplicación y organismo de fiscalización*. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Nación, la que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar en las provincias, el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.

Art. 9° – *Condiciones de prestación*. Los sujetos activos de esta ley estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.

Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.

Art. 10. – *Política de mercado*. El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiability de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que actúen legítimamente en el sector, en beneficio del interés general y de los usuarios en particular.

La autoridad de aplicación, dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada esta ley y con el asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia deberá:

- a) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de transferencia del producto entre

las etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado, puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del mercado interno;

- b) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
- c) Establecer límites a la concentración del mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena de negocio. La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.

TÍTULO II

Disposiciones particulares

CAPÍTULO I

Producción

Art. 11. – *La actividad de producción.* La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

Podrá disponerse la apertura de nuevas plantas o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.

CAPÍTULO II

Fraccionamiento

Art. 12. – *La actividad de fraccionamiento.* Se podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.

Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el sólo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda. El envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.

El fraccionador deberá acreditar, al momento de solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.

Art. 13. – *Responsabilidades.* El fraccionador será responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación.

Asimismo, el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para su posterior distribución o comercialización, así como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.

El fraccionador podrá vender libremente al público, y en caso de hacerlo deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista vigente.

Art. 14. – *Envases: su propiedad e identificación.* Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones contenidas en la presente ley y la reglamentación que se dicte al efecto.

La propiedad de los envases de los fraccionadores les será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda y número de registro. Los envases con marca no podrán venderse, siendo entregados en comodato a los usuarios por los fraccionadores.

En el caso de que un tenedor de envase acredite la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en comodato.

Art. 15. – *Registro.* Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de aplicación.

Art. 16. – *Obligación de registración.* Todos los fraccionadores deberán encontrarse registrados y, a su vez, registrar los envases de su propiedad de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación.

Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva registración, se considerarán de propiedad de cada fraccionador los envases que estén identificados con su marca o leyenda.

Art. 17. – *Capitación de envases.* Los fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la cadena de comercialización, están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o de terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de envases distinto, en función de la evolución futura de las modalidades de comercialización del GLP envasado.

Art. 18. – *Identificación y responsabilidad.* El fraccionador deberá individualizar los envases por él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado en el cual constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.

Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar en una etiqueta adherida al mismo fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.

Art. 19. – *Centros de canje.* Los participantes del mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrado ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.

Los centros de canje deberán ser de propiedad de personas físicas o jurídicas sin vinculación societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.

La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones necesarias para el registro de los mismos.

Art. 20. – *Parque de envases.* Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes en la industria o, en su defecto, por la autoridad de aplicación.

El parque de envases de uso común persigue los siguientes objetivos:

- a) Asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras, que cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar a través de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
- b) Promover el funcionamiento competitivo, transparente y no discriminatorio del sector gas licuado de petróleo;
- c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado de petróleo.

Ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando que en ningún caso el número o porcentaje asig-

nado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados.

Art. 21. – *Seguro obligatorio.* Cada fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije la autoridad de aplicación.

A los fines de quedar cubierto por el seguro integral, el usuario damnificado deberá exhibir la factura donde conste la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO III

Transporte

Art. 22. – *Transporte.* El transporte del GLP ya sea por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estará sometido a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por la autoridad de aplicación o el organismo técnico de fiscalización y control.

Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos, los titulares de tales concesiones tendrán los derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y 66 de la ley 17.319.

CAPÍTULO IV

Distribución

Art. 23. – *De la distribución.* La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley 24.076.

Art. 24. – *Obligación.* Los distribuidores estarán obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas.

Art. 25. – *Responsabilidad.* Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.

El distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO V

Almacenaje

Art. 26. – *Del almacenaje.* Quienes se dediquen a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

Acceso abierto

Art. 27. – *Del acceso abierto.* Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones obrantes en el presente capítulo.

Art. 28. – *Acceso de terceros.* La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas, las tarifas que como máximo deberán abonarse por el servicio.

Art. 29. – *Procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.* La autoridad de aplicación en un plazo no mayor de sesenta (60) días dictará las normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.

Art. 30. – *Parámetros para la fijación de la tarifa.* La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden al acceso abierto a terceros:

- a) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
- b) Remuneración del capital; y,
- c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.

CAPÍTULO VII

Comercialización

Art. 31. – *Comercialización.* Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe.

Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta

prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni terceros.

A los fines de la fiscalización de lo normado en el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los contratos de vinculación entre fraccionadores y comercializadores.

CAPÍTULO VIII

Gran consumidor

Art. 32. – *Gran consumidor.* La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberán inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y sólo podrán almacenar para consumo propio, en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal de sus actividades.

Art. 33. – *Instalaciones de almacenaje.* Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de aplicación establecerá a tales efectos.

CAPÍTULO IX

Precios de referencia del GLP para uso domiciliario

Art. 34. – *Precio de referencia para GLP en envases.* La autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano un precio de referencia para el GLP de uso doméstico nacional en envases de hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.

Dicho precio referencial será calculado en relación al principio conceptual expresado en el inciso b) del artículo 7° de la presente ley, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes, y una razonable rentabilidad.

CAPÍTULO X

Operaciones de importación y exportación

Art. 35. – *De la importación y exportación.* Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.

La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la solicitud.

Art. 36. – *Restricciones.* El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las ope-

raciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o punitivas cuando las mismas estén subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.

TITULO III

CAPÍTULO I

De la autoridad de aplicación

Art. 37. – *Funciones y facultades.* La autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad;
- c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés público;
- d) Dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
- e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;
- f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia de procedimientos de prueba, reparación, destrucción y reposición de envases;
- g) Establecer mecanismos fiables e inviolables de identificación de envases;
- h) Dictar las normas técnicas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y medios de transporte;
- i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
- j) Requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
- k) Promover ante los tribunales competentes, las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;

- l) Realizar el registro de las exportaciones y el cálculo de la paridad de exportación;
- m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
- n) Ordenar, procesar y publicar la información sobre la industria de GLP; de las decisiones que adopte y los antecedentes en que las mismas se basen;
- o) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; y,
- p) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.

Art. 38. – *De los recursos.* A los fines de la presente ley, asignanse a la autoridad de aplicación los siguientes recursos:

- a) La tasa de fiscalización y control creada por el artículo 39; y,
- b) El producido de las multas y decomisos.

Art. 39. – *Tasa de fiscalización - determinación - obligados al pago.* Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 40. – *Control jurisdiccional.* A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, serán de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.

Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara federal de apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.

CAPÍTULO II

Contravenciones y sanciones

Art. 41. – *Régimen sancionatorio.* El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.

Art. 42. – *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley y su reglamenta-

ción serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) Multas que oscilarán de una (1) a mil (1.000) veces el costo de una tonelada de propano a nivel mayorista, conforme el valor que fije la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del inculpidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
- b) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
- c) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
- d) Apercibimientos, clausuras y decomisos.

Art. 43. – *De la fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento de autoridad competente.

TITULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural

Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural.

Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto financiar a) la adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos, y b) la expansión de ramales de distribución y redes domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos en que resulte técnicamente posible y económicamente factible.

Art. 46. – El fondo mencionado en el artículo anterior se alimentará con diversas fuentes de financiamiento, según lo disponga el Poder Ejecutivo nacional.

TITULO V

Disposiciones transitorias y finales

Art. 47. – *Plazo de registro de envases.* Los participantes de la industria del GLP contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a los fines de registrar

los envases de propiedad de los distintos actores y participantes.

Art. 48. – *Impuesto al valor agregado.* El impuesto al valor agregado (IVA) aplicable a toda la cadena de venta del GLP tendrá una alícuota de 10,5 %.

Art. 49. – *Caracterización de la actividad de distribución o comercialización.* La distribución y comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto de la misma.

Art. 50. – *Normas técnicas de aplicación supletoria.* Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E. con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.

Art. 51. – *Orden público.* La presente ley es de orden público y de conformidad con ello, derógase toda otra disposición que se oponga a la misma.

Art. 52. – *De la reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de noventa (90) días a contar desde su entrada en vigencia.

Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 17 de junio de 2004.

Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Luis E. Martinazzo. – Silvia E. Giusti. – Norberto Massoni. – Oscar A. Castillo. – Haidé Giri.

Con disidencias parciales artículos 45 y 46:

Fabián Ríos.

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º – *Objeto.* La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.

Art. 2º – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) *GLP. Gas Licuado de Petróleo:* las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se envasan en estado líquido bajo presión;
- b) *Productor:* Toda persona física o jurídica que obtenga GLP por cualquier procedimiento técnico autorizado;
- c) *Fraccionador:* Toda persona física o jurídica que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, conforme surge de la presente ley;
- d) *Transportista:* Toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento, distribución o comercialización o entre ellos;
- e) *Distribuidor:* Toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato de concesión o de distribución con un fraccionador, distribuya o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado, a granel o por redes;
- f) *Comercializador:* Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP fraccionado o a granel a usuarios, consumidores finales o a terceros;
- g) *Almacenador:* Toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
- h) *Gran consumidor:* Toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
- i) *Acceso al fraccionamiento y almacenamiento:* Obligación del titular de la actividad de fraccionamiento o almacenaje de poner a disposición de terceros la capacidad ociosa técnica efectiva de sus activos destinados a la actividad, según la proporción que establezca la reglamentación, en situaciones de emergencia declaradas previamente por la autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por su encarecimiento excesivo, y por un período determinado.

Art. 3º – *Ambito de aplicación.* Quedan comprendidos en la presente ley las actividades de producción, transporte, almacenaje, fraccionamiento, distribución y comercialización de GLP en el territorio nacional.

Art. 4º – *Sujetos.* Son sujetos de la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, usuarios y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas habilitadas al efecto por la autoridad de aplicación.

Art. 5º – *Servicio público.* A los efectos de la presente ley se declara servicio público a la industria del GLP en todas sus etapas.

Art. 6º – *Libertad comercial.* Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente de acuerdo con el presente régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo y las disposiciones generales previstas en la normativa vigente, debiendo propender a la competencia, la no discriminación, el libre acceso de los sujetos de esta ley al mercado, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del ambiente.

Art. 7º – *Política general en la materia.* Fíjense los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:

- a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
- b) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables;
- c) Propender a que el precio del GLP sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas hasta el consumidor, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible y desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;
- d) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
- e) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado;

- f) Propender a la diversificación del uso del GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8° – *Autoridad de aplicación.* Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) creado por la ley 24.076.

Art. 9° – *Condiciones de prestación.* Quienes intervengan en cualquiera de las etapas de la actividad estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el ambiente. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total o baja otorgada por la autoridad de aplicación.

Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública y proteger el ambiente.

TITULO II

Disposiciones particulares

CAPÍTULO I

Parte general

Art. 10. – *Prohibición de integración.* Los concesionarios de explotación de hidrocarburos y los transportistas de gas natural por redes que no tengan contrato de concesión de servicio público, no podrán fraccionar ni distribuir GLP envasado ni intervenir directa o indirectamente en su comercialización. Esta disposición comprende a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.

Art. 11. – *Régimen sancionatorio.* El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo. Serán de aplicación supletoria en la materia las leyes 17.319; 20.680; 24.076; 24.240; 25.156 y sus modificatorias.

CAPÍTULO II

Fraccionamiento

Art. 12. – *Del libre fraccionamiento.* La actividad de fraccionamiento será libre. Se podrán autorizar la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

Para ser fraccionador se deberá contar con la habilitación correspondiente otorgada por la autoridad

de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.

Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad.

Asimismo, podrán contratar con terceros distribuidores, comercializadores o consumidores el fraccionamiento y envasado de GLP. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.

El fraccionador deberá acreditar, al momento de solicitar la habilitación o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.

TITULO I

Envases para la comercialización de GLP

Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Envases de GLP (Sinegalp), el que estará integrado por la totalidad de las garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad habilitados para el fraccionamiento de gas licuado, ya sea que se encuentren en poder de las plantas fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes o usuarios, y será administrado por la autoridad de aplicación.

Art. 14. – Los fraccionadores deberán aportar al Sinegalp un número mínimo de envases proporcional a su volumen de compra de producto a fin de dar comienzo al funcionamiento de los centros de recambio.

Los envases deberán registrar en su cuerpo el año de fabricación y el número de habilitación del fraccionador. Ninguna otra identificación se agregará a los envases. La reglamentación determinará el modo y plazos de adaptar o sustituir los envases existentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Los fraccionadores que no aporten el parque mínimo de envases a que se refiere este artículo no podrán canjear envases en el centro de recambio.

Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables de la reposición de los envases identificados con su número de habilitación que se den de baja del Sinegalp por vencimiento del plazo de vida útil que establezca la reglamentación.

Art. 16. – Todos los envases destinados al uso de GLP serán de un mismo color, correspondiente al normado para ese tipo de combustible.

Art. 17. – La autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación de envases por cada área de mercado del territorio nacional en el que se desarrolle la actividad, con la ubicación geográfica que se considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

Art. 18. – Los centros de recambio deberán recibir de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados para su reparación. Deberán entregar a cambio envases aptos para su llenado.

Art. 19. – Los centros de recambio estarán a cargo de una persona jurídica totalmente ajena a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo que establezca la reglamentación para ambos casos. Su administración y operación será de carácter privado y serán habilitados por la autoridad de aplicación, quien establecerá sus reglas de funcionamiento.

Art. 20. – La autoridad de aplicación determinará el procedimiento a seguir para que la asignación de los trabajos de reparación de envases sea efectuada en función de competencia en precio, calidad, plazo de entrega y mejor relación costo-eficiencia.

Art. 21. – Los fraccionadores deberán efectuar un aporte en pesos por kilo de GLP a granel que compren, que se destinará al mantenimiento de los centros de recambio y a la reparación y reacondicionamiento de envases. El fondo resultante será administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación. El aporte será reajustado semestralmente, previa audiencia de las fraccionadoras por la autoridad de aplicación en función del Plan de Reparación de Envases.

A los fines de su cumplimiento, los productores, operadores de servicio de puerto, almacenadores y comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas de productos efectuadas a los fraccionadores.

Art. 22. – Para desarrollar su actividad comercial en el sector de GLP, los fraccionadores deberán participar necesariamente en el centro de recambio y reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto y deberán instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.

El acceso de los fraccionadores a los centros de recambio será irrestricto y bajo ningún concepto podrán establecerse requisitos o condiciones de ingreso que traben su admisión y permanencia, a criterio de la autoridad de aplicación.

Art. 23. – Los centros de recambio deberán adoptar normas de administración e información que faciliten a los fraccionadores participantes contar con los envases necesarios para su recambio.

Art. 24. – Los fraccionadores que hayan instalado en el domicilio de sus usuarios tanques fijos para la provisión de GLP a granel deberán observar las normas de seguridad que al efecto determine la autoridad de aplicación.

Art. 25. – Los fraccionadores deberán asegurar a los usuarios con tanques fijos entregados en comodato el normal abastecimiento del producto, pudiendo

el usuario en caso contrario requerir el retiro del tanque al fraccionador sin incurrir en penalidades.

Hasta tanto el fraccionador no retire el tanque fijo instalado, y a fin de no verse privado del producto, el usuario podrá solicitar a cualquier otro fraccionador el llenado del tanque.

Art. 26. – En el caso previsto en el artículo anterior, los fraccionadores que llenen tanques fijos instalados por otro fraccionador, serán solidariamente responsables en los términos del artículo 27 de la presente ley.

Art. 27. – *Identificación y responsabilidad.* El fraccionador deberá individualizar los envases por él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado y número de registro.

Ante cada llenado de un envase que lleve su leyenda o la de terceros, el fraccionador deberá adherirle una etiqueta en la que registrará: fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.

La responsabilidad civil y penal de los fraccionadores por los daños que causen a las personas y los bienes los envases despachados a plaza desde su planta, se determinará de conformidad con las normas que rigen la materia en los respectivos códigos de fondo.

Art. 28. – *Seguro obligatorio.* Los fraccionadores deberán contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura patrimonial por los daños causados a terceros, en las condiciones y hasta el monto que fije la autoridad de aplicación. En el caso de contratos bilaterales para el envasado en envases que no lleven su leyenda, las partes contratantes serán solidariamente responsables.

CAPÍTULO III

Transporte

Art. 29. – *Calidad de transportista.* Todos aquellos transportistas no incorporados a la normativa de la ley 17.319, deberán obtener una licencia de transporte –habilitación– de conformidad con las previsiones de la presente ley.

La calidad de transportista se adquiere:

- a) Mediante la habilitación de las unidades de transporte por tierra, conforme la presente ley y su reglamentación, que emitirá la autoridad de aplicación;
- b) Tratándose de transporte por agua, por el cumplimiento de las normas de seguridad de la navegación relacionadas con el transporte de GLP que imponen las normas nacionales e internacionales a las que ha adherido la República Argentina, y la registración ante la autoridad de aplicación;

- c) Tratándose de ductos, serán de aplicación las normas contenidas en los artículos 39 a 44 de la ley 17.319.

CAPÍTULO IV

Distribución

Art. 30. – *De la distribución.* La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 24.076.

Los distribuidores deberán recibir todos los envases tengan o no marca o leyenda.

Los distribuidores estarán obligados a verificar que los envases que reciban de los fraccionadores con los que contraten cumplan con las normas de seguridad y calidad establecidas en esta ley y por la autoridad de aplicación. Esta obligación alcanza a los depósitos y medios de transporte propios o de terceros con quienes realicen la distribución.

Art. 31. – *Responsabilidad por incumplimientos.* Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder y que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.

CAPÍTULO V

Almacenaje

Art. 32. – *Del almacenaje.* Esta actividad es libre, debiendo contar los titulares con capacidad de almacenaje propia o de terceros. Quienes se dediquen a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la operatoria y toda aquella que al efecto fije la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

Acceso abierto

Art. 33. – *Del acceso abierto.* Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de fraccionamiento y almacenaje de GLP en situaciones de emergencia, declaradas previamente por la autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por el encarecimiento excesivo del mismo, y por un período determinado, con el objeto de proveerlo al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, en las condiciones previstas en la presente ley y en la proporción que establecerá la reglamentación para situaciones normales.

Art. 34. – *Acceso de terceros.* El régimen de acceso abierto no tendrá otra limitación que el pago de una tarifa preestablecida por el servicio basada en términos de volumen o tiempo, y al cumplimiento

de lo establecido en esta ley y las reglamentaciones que se dicten a su respecto. La autoridad de aplicación establecerá en todos los casos las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso abierto y las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente las tarifas que como máximo deberán abonarse por el servicio, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 37.

Art. 35. – *Procedimiento operativo de acceso abierto.* El régimen de acceso abierto será de aplicación a aquellos activos con capacidad técnica efectiva ociosa mayor al 10 %; sus titulares y la autoridad de aplicación deberán:

- a) Informar mensualmente de conformidad con la modalidad que determine la reglamentación, la capacidad disponible de su activo para el mes subsiguiente, con relación al producto o productos disponibles, así como también el precio tentativo propuesto por el titular para el servicio disponible, respecto del activo de que se trate. El precio tentativo no podrá exceder las tarifas determinadas como máximas por la autoridad de aplicación para cada servicio;
- b) La autoridad de aplicación dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de las declaraciones de capacidad ociosa para llamar a licitación de la misma, comunicando en ese acto el tope tarifario admitido. Las partes oferentes y demandantes de capacidad ociosa podrán contratar libremente la misma, debiendo informar a la autoridad de aplicación la capacidad remanente en su caso y detallando capacidad involucrada.

Art. 36. – *Sujetos beneficiarios.* Cualquier persona física o jurídica podrá presentarse a las licitaciones de capacidad ociosa y ofrecer hacer uso de ella, cumpliendo los siguientes requisitos, además de los que fije la reglamentación:

- a) Estar inscripta de conformidad con las previsiones de la presente ley como fraccionador, distribuidor, comercializador o gran consumidor;
- b) Determinar volumen, servicio y activo involucrado;
- c) Constituir garantía a favor de la prestataria del activo o servicio por monto equivalente al costo del servicio requerido.

Art. 37. – *Parámetros para la fijación de la tarifa.* La autoridad de aplicación deberá considerar los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden al acceso abierto:

- a) Posibilidad de acceso de los usuarios del servicio;

- b) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
- c) Remuneración del capital;
- d) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.

CAPÍTULO VII

Comercializador y consumidores

Art. 38. – *Libre comercialización.* Los comercializadores podrán vender GLP envasado por cualquier fraccionador o a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe y vender más de una leyenda.

Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera quiten virtualidad a lo aquí dispuesto, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni a terceros.

A los fines de la fiscalización de lo normado en el presente artículo, la reglamentación fijará el plazo en el que los fraccionadores y comercializadores deberán presentar ante la autoridad de aplicación los contratos.

Art. 39. – *Prohibición.* La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del cual se considerará a los consumidores como grandes consumidores. Los grandes consumidores no podrán fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen. Sólo podrán almacenar para consumo propio en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal de sus actividades. Asimismo deberán registrarse y adquirir la correspondiente habilitación por parte de la autoridad de aplicación.

Art. 40. – *Instalaciones de almacenaje.* Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de aplicación establecerá a tales efectos.

CAPÍTULO VIII

Operaciones de importación y exportación

Art. 41. – *De la importación y exportación.* Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.

La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la solicitud. El silencio, en tal caso, implicará conformidad.

Los importadores y exportadores remitirán al Ente Nacional Regulador de Gas la copia de los respectivos contratos.

Art. 42. – *Restricciones.* El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o punitivas cuando las mismas estén subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en los acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

La autoridad de aplicación

Art. 43. – *Funciones y facultades.* La autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad;
- c) Procurar evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés público;
- d) Dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
- e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
- f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia de procedimientos de prueba, reparación, destrucción y reposición de envases;
- g) Establecer mecanismos fiables e inviolables de identificación de envases;
- h) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y medios de transporte;
- i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
- j) Requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;

- k) Promover ante los tribunales competentes, las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;
- l) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
- m) Ordenar, procesar y publicar la información sobre la industria de GLP; de las decisiones que adopte y los antecedentes en que las mismas se basen. También publicará y actualizará periódicamente las bases de datos que posea;
- n) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;
- o) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.

Art. 44. – *De los recursos.* Los recursos de la autoridad de aplicación a los fines de esta ley, además de los previstos en la ley 24.076, se integrarán con:

- a) La tasa de fiscalización y control creada por el artículo 45; y,
- b) El producido de las multas y decomisos.

Art. 45. – *Tasa de fiscalización; determinación; obligados al pago.* Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente a la autoridad de aplicación una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 46. – *Control jurisdiccional.* Las resoluciones de la autoridad de aplicación podrán recurrirse en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias dentro de los treinta días hábiles posteriores a su notificación. Los recursos se otorgarán con efecto devolutivo salvo los casos de suspensión e inhabilitación, clausura o decomiso, los que se otorgarán con efecto suspensivo.

Agotada la vía administrativa, procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.

CAPÍTULO II

Contravenciones y sanciones

Art. 47. – *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) Apercibimientos;

- b) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20) veces del monto que el infractor deba abonar en concepto de tasa de fiscalización anual, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
- c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
- d) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
- e) Clausuras y decomisos.

Art. 48. – *De la fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y la orden de procedimiento.

TÍTULO IV

Disposiciones transitorias y finales

Art. 49. – *De la concentración.* De existir mayor concentración en empresas que la establecida en el artículo 10 de la presente ley, determinada por volumen de mercado y por región, la empresa afectada en un plazo máximo de dos (2) años, deberá transferir los activos que considere necesarios o, en su defecto, disminuir los volúmenes a los fines de ajustarse a las previsiones de la presente ley.

Art. 50. – *Aplicación de normas técnicas.* Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S. E., con sólo las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.

Art. 51. – *Orden público.* La presente ley es de orden público y, de conformidad con ello, derógase toda otra disposición que se oponga a la misma.

Art. 52. – *De la reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de noventa (90) días a contar desde su entrada en vigencia.

Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro. – Jorge A. Agúndez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto viene a llenar un espacio que quedó librado a la buena de Dios y la mala del mercado

durante una década, por lo tanto dejó a sus consumidores en una peligrosa desprotección y es más grave aún si advertimos que esos consumidores son unos 4 millones y provienen de hogares de bajos recursos. Por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de dotar al sector de un marco regulatorio.

En este proyecto incorporamos a la producción de GLP como actividad de la cadena formadora de precios, por un lado para que el aspecto más importante no juegue por fuera con capacidad de distorsionar lo que el mismo marco pretende regular y a la vez para eliminar todo tipo de abusos.

Otro aspecto importantísimo que incorpora este proyecto, es a mi entender la declaración de servicio público a toda la actividad, la productora, comercializadora y proveedora de GLP. El concepto moderno de los servicios públicos dice son las actividades que el Estado declara como tal por considerarlas importantes, su necesidad extrema, para evitar prácticas monopólicas o para evitar situaciones dominantes en un sector (*publicatio*).

Al respecto, Dromi desde otra vereda ideológica dice que “un servicio público es una prestación de interés comunitario”. Abunda diciendo que el artículo 42 de la Constitución Nacional impone a las autoridades el deber de proveer control de calidad y eficiencia en los servicios públicos, reconociendo con ello el derecho de los usuarios a un nivel de prestación adecuado para el mejoramiento de sus condiciones de vida. El Preámbulo de la misma Constitución dice “promover el bienestar general”, con lo cual estamos frente a un imperativo de que el bien común es causa orientadora de la existencia estatal. Es por lo tanto la noción de servicio público, la razón de ser del Estado al perseguir el bien común.

Estas modernas definiciones, obviamente, no implican que el Estado monopoliza esos servicios, de hecho pueden ser gestionados por otros sujetos, privados o públicos revalorizándose con ello el servicio público.

Por último, a modo de ser sintético, quiero manifestar que este proyecto incorpora una novedosa e importante modalidad de propiedad participada de los envases. Se propone crear un Sistema Nacional de Envases de Gas Licuado de Petróleo:

Este sistema estará integrado por la totalidad de las garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad habilitados para el fraccionamiento de gas licuado, ya sea que se encuentren en poder de las plantas fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes o usuarios, y será administrado por la autoridad de aplicación.

El sistema no importa una confiscación de bienes, ni un desconocimiento de la titularidad de los envases, simplemente que éstos pasan a formar parte del patrimonio del sistema, y sus aportantes accionistas del mismo.

Los fraccionadores deberán aportar al Sinegalp un número físico mínimo de envases proporcional a su volumen de compra de producto. Los envases deberán registrar en su cuerpo el año de fabricación y el número de habilitación del fraccionador. Ninguna otra identificación se agregará a los envases.

Las fraccionadores serán responsables de la reposición de los envases identificados con su número de habilitación que se den de baja del Sinegalp por vencimiento del plazo de vida útil que establezca la reglamentación.

Se establece asimismo que todos los envases destinados al uso de GLP serán de un mismo color, correspondiente al normado para ese tipo de combustible.

A los fines de asegurar la reparación de los envases averiados y la destrucción de los vencidos se prevé en el proyecto que la autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación de envases por cada área de mercado del territorio nacional en el que se desarrolle la actividad, con la ubicación geográfica que se considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones los que deberán recibir de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados para su reparación, entregando a cambio envases aptos para su llenado.

Estos centros de recambio deberán estar a cargo de personas jurídicas totalmente ajenas a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones. Su administración y operación será de carácter privado.

El mantenimiento de los centros de recambio y la reparación y reacondicionamiento de envases se efectuará con un aporte a cargo de las fraccionadoras, por kilo de GLP a granel que compren, El fondo resultante será administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación.

A los fines de su cumplimiento, los productores, operadores de servicio de puerto, almacenadores y comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas de productos efectuadas a los fraccionadores.

Se establece la obligatoriedad de la participación de los fraccionadores en el centro de recambio y reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto e instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.

El acceso de las fraccionadores a los centros de recambio será irrestricto.

A fin de dar comienzo al funcionamiento de los centros de recambio los fraccionadores deberán aportar un parque mínimo de envases, relacionado con sus ventas de producto, que establezca la autoridad de aplicación.

Por los motivos expuestos, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.

*Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro.*

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

SUBSIDIO PARA CONSUMIDORES DE GAS EN GARRAFAS

Artículo 1° – Establécese un subsidio de 10 pesos (\$ 10) por garrafa de diez kilogramos (10 kg) para consumidores localizados en zonas en donde no exista distribución de gas por cañerías y/o por medio de gasoductos.

Art. 2° – Instrumentétese un bono directo de compensación entre empresas a ser abonado contra retenciones hidrocarburíferas, Bono Compensación Gas Garrafa (Bocomgar), a los efectos del financiamiento de lo dispuesto por el artículo 1°.

Art. 3° – Establécese la adopción de centros de distribución de garrafas de gas por jurisdicciones provinciales no beneficiarias por redes de distribución domiciliaria con el objeto de reducir la cadena de intermediación y disminuir el precio de venta al público.

Art. 4° – El monto de los subsidios a distribuir en la provincia del Chaco debe alcanzar a doscientos mil (200.000) garrafas, equivalente a dos millones de pesos (\$ 2.000.000) por mes.

Art. 5° – El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Combustibles, será la autoridad de aplicación de las disposiciones de la presente ley.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una serie de parámetros y estrategias destinadas a resolver el problema del precio de la garrafa de gas en las provincias que no poseen ningún mecanismo de provisión por gasoducto.

La provincia del Chaco tiene un millón de habitantes con más del 60 % de la población por debajo de la línea de pobreza y muchos consumidores de garrafas que han observado un incremento extraordinario de 10 a 25 pesos en el precio promedio desde la salida de la convertibilidad en el mes de enero del año 2002.

La ejecución de un mecanismo de distribución a través de centros específicamente diseñados en las provincias argentinas y la instrumentación de un

bono que opere como un subsidio directo a las familias consumidoras podrán reducir a 8 o 10 pesos, aproximadamente, el precio de la garrafa de 10 kilogramos.

En efecto, los centros de distribución –donde los consumidores podrán acceder a precios más baratos– reducen la cadena de intermediación entre los productores, los refinadores, los distribuidores y los comercios que expenden estas garrafas.

La diferencia de precio entre distribuidores y comerciantes es de aproximadamente 5 a 7 pesos según la provincia y la localización y características del comerciante.

La cadena de producción y comercialización está integrada por aproximadamente 16 productores, 60 fraccionadoras y 20.000 distribuidores en todo el país.

La combinación de un subsidio directo para reducir el precio y la articulación del consumidor con el centro de distribuidores permitirá lograr un precio equivalente de la garrafa de 10 kg al vigente en el mes de diciembre de 2001.

Esta ley permitirá corregir fuertes asimetrías respecto al precio que pagan los usuarios que se beneficiaron con la ley 25.561 de emergencia cambiaria, administrativa, financiera y económica que estableció la desindexación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos favoreciendo a los grandes centros urbanos. La creación del fondo fiduciario para la compensación de servicios de gas con más de 100 millones de pesos anuales favorece a 450.000 usuarios patagónicos.

Consecuentemente, las provincias más pobres son las más perjudicadas por el incremento de las tarifas de gas licuado de petróleo sin posibilidad de adoptar mecanismos compensatorios que agudizan aún más la situación de distribución inequitativa de la riqueza a nivel espacial.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta moción de trascendencia social impostergable.

Jorge M. Capitanich.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° – *Objeto.* La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.

Art. 2° – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) GLP –gas licuado de petróleo–: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan y comercializan en estado líquido bajo presión;
- b) Productor: toda persona física o jurídica que obtenga gas licuado a partir de la refinación de hidrocarburos líquidos o de la captación o separación del gas licuado de petróleo a partir del gas natural por cualquier método técnico;
- c) Importador: toda persona física o jurídica que importe GLP para comercializarlo en el mercado interno;
- d) Fraccionador: toda persona física o jurídica que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia marca o de terceros, conforme surge de la presente ley;
- e) Transportista: toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento, distribución o comercialización o entre ellos;
- f) Distribuidor: toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado o a granel;
- g) Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, consumidores finales o a terceros;
- h) Almacenador: toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
- i) Prestador de servicios de puerto: toda persona física o jurídica que preste servicios de almacenaje, despacho, etcétera, vinculados a actividades o instalaciones portuarias;
- j) Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de la reglamentación;

- k) Centro de canje: toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3° – *Ambito de aplicación.* Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de GLP en el territorio nacional.

Art. 4° – *Sujetos activos.* Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.

Los responsables de la distribución de GLP por redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.

Art. 5° – *Interés público.* Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del GLP son declaradas de interés público, en función de los objetivos señalados en el artículo 7° de la presente ley.

Art. 6° – *Libre ejercicio de la actividad.* Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la seguridad pública.

Art. 7° – *Política general en la materia.* Fíjense los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:

- a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
- b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, y asegurar que los precios del producto en el mercado interno no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de aplicación;
- c) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publi-

cidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes;

- d) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;
- e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
- f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado; y,
- g) Propender a la diversificación del uso del GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8° – Autoridad de aplicación y organismo de fiscalización. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Nación y organismo de fiscalización y control técnico, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el que estará facultado para el dictado de la normativa técnica. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar en las provincias, el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.

Art. 9° – Condiciones de prestación. Los sujetos activos de esta ley estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.

Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.

Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que actúen legítimamente en el sector, en beneficio del interés general y de los usuarios en particular.

La autoridad de aplicación, dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada esta ley y con el asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia deberá:

- a) Establecer mecanismos de transferencia del producto entre las etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del mercado interno;
- b) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
- c) Establecer mediante reglamentación límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio, considerando como volumen máximo permitido el quince por ciento (15 %) del mercado de envases para uso domiciliario. Esta disposición comprenderá a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.

TÍTULO II

Disposiciones particulares

CAPÍTULO I

Producción

Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

Podrán disponerse la apertura de nuevas plantas o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.

CAPÍTULO II

Fraccionamiento

Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se podrán autorizar la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.

Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con

el sólo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda. El envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación. En caso de no haber acuerdo la autoridad de aplicación podrá regular el valor de procesamiento y el precio del envasado a la salida de la planta de fraccionamiento.

El fraccionador deberá acreditar, al momento de solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.

Art. 13. – *Responsabilidades.* El fraccionador será responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación.

Asimismo, el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que, sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para su posterior distribución o comercialización, así como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.

El fraccionador tendrá la obligación de vender libremente al público y de exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista vigente.

Art. 14. – *Envases: su propiedad e identificación.* Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones contenidas en la presente ley y la reglamentación que se dicte al efecto.

La propiedad de los envases de los fraccionadores, distribuidores o comercializadores les será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda y número de registro. Los envases con marca no podrán venderse, siendo entregados en comodato a los usuarios por los fraccionadores.

En el caso de que un tenedor de envase acredite la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en comodato.

Art. 15. – *Registro.* Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de aplicación.

Art. 16. – *Obligación de registración.* Todos los fraccionadores deberán encontrarse registrados y, a su vez, registrar los envases de su propiedad de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación.

Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva registración, se considerarán de propiedad de cada

fraccionador los envases que estén identificados con su marca o leyenda.

Art. 17. – *Capitación de envases.* Los fraccionadores están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o de terceros, sean estos fraccionadores, distribuidores o comercializadores. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de envases distinto, en función de la evolución futura de las modalidades de comercialización del GLP envasado.

Art. 18. – *Identificación y responsabilidad.* El fraccionador deberá individualizar los envases por él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado y número de registro.

Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.

Art. 19. – *Centros de canje.* Los participantes del mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.

Los centros de canje deberán ser de propiedad de personas físicas o jurídicas sin vinculación societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.

La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones necesarias para el registro de los mismos.

Art. 20. – *Parque de envases.* Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes en la industria o, en su defecto, por la autoridad de aplicación.

El parque de envases de uso común persigue los siguientes objetivos:

- a) Asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras, que cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar a través de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
- b) Promover el funcionamiento competitivo, transparente y no discriminatorio del sector gas licuado de petróleo;

- c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado de petróleo.

Si ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados.

Art. 21. – *Seguro obligatorio.* Cada fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije la autoridad de aplicación.

A los fines de quedar cubierto por el seguro integral el consumidor damnificado deberá exhibir la factura donde conste la marca y el número de envase.

CAPÍTULO III

Transporte

Art. 22. – *Transporte.* El transporte del GLP ya sea por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estarán sometidos a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por la autoridad de aplicación o el organismo técnico de fiscalización y control.

CAPÍTULO IV

Distribución

Art. 23. – *De la distribución.* La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley 24.076.

Art. 24. – *Obligación.* Los distribuidores estarán obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas.

Art. 25. – *Responsabilidad.* Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.

El distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca del envase.

CAPÍTULO V

Almacenaje

Art. 26. – *Del almacenaje.* Quienes se dediquen a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

Acceso abierto

Art. 27. – *Del acceso abierto.* Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones obrantes en el presente capítulo.

Art. 28. – *Acceso de terceros.* La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente las tarifas que como máximo deberán abonarse por el servicio.

Art. 29. – *Procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.* La autoridad de aplicación en un plazo no mayor de sesenta (60) días dictará las normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.

Art. 30. – *Parámetros para la fijación de la tarifa.* La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden al acceso abierto a terceros:

- a) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
- b) Remuneración del capital; y,
- c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.

CAPÍTULO VII

Comercialización

Art. 31. – *Comercialización.* Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe.

Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni terceros.

A los fines de la fiscalización de lo normado en el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los contratos de vinculación entre fraccionadores y comercializadores.

CAPÍTULO VIII

Gran consumidor

Art. 32. – *Gran consumidor.* La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberán inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y sólo podrán almacenar para consumo propio, en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal de sus actividades.

Art. 33. – *Instalaciones de almacenaje.* Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de aplicación establecerá a tales efectos.

CAPÍTULO IX

De la regulación de precios de GLP para uso domiciliario

Art. 34. – *Precio de referencia para GLP en envases.* La autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano un precio de referencia para el GLP de uso doméstico nacional en envases de hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.

Dicho precio referencial será calculado en relación al principio conceptual expresado en el inciso b) del artículo 7º de la presente ley, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes, y una razonable rentabilidad.

CAPÍTULO X

Operaciones de importación y exportación

Art. 35. – *De la importación y exportación.* Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.

La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la solicitud.

Art. 36. – *Restricciones.* El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o punitivas cuando las mismas estén subsidiadas en su

país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

De la autoridad de aplicación

Art. 37. – *Funciones y facultades.* La autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades, pudiendo delegar en el Enargas aquellas que considere oportuno llevar a cabo:

- a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad;
- c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés público;
- d) Dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
- e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
- f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia de procedimientos de prueba, reparación, destrucción y reposición de envases;
- g) Establecer mecanismos fiables e inviolables de identificación de envases;
- h) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y medios de transporte;
- i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
- j) Requerir a los actores del presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
- k) Promover ante los tribunales competentes, las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;
- l) Realizar el registro de las exportaciones y el cálculo de la paridad de exportación;

- m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
- n) Ordenar, procesar y publicar la información sobre la industria de GLP; de las decisiones que adopte y los antecedentes en que las mismas se basen;
- o) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; y,
- p) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.

Art. 38. – *De los recursos.* A los fines de la presente ley, asignase a la autoridad de aplicación los siguientes recursos:

- a) La tasa de fiscalización y control creada por el artículo 39; y,
- b) El producido de las multas y decomisos.

Art. 39. – *Tasa de fiscalización –determinación– obligados al pago.* Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 40. – *Control jurisdiccional.* A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.

Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.

CAPÍTULO II

Contravenciones y sanciones

Art. 41. – *Régimen sancionatorio.* El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.

Art. 42. – *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20) veces del monto que el infractor deba abo-

nar en concepto de tasa de fiscalización anual, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;

- b) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
- c) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
- d) Apercibimientos, clausuras y decomisos.

Art. 43. – *De la fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento de autoridad competente.

TÍTULO IV

Disposiciones transitorias y finales

Art. 44. – *Plazo de registro de envases.* Los participantes de la industria del GLP contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a los fines de registrar los envases de propiedad de los distintos actores y participantes.

Art. 45. – *Normas técnicas de aplicación supletoria.* Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.

Art. 46. – *Orden público.* La presente ley es de orden público y de conformidad con ello, derógase toda otra disposición que se oponga a la misma.

Art. 47. – *De la reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de noventa (90) días a contar desde su entrada en vigencia.

Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En virtud de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo normado en la ley 13.640 y sus modificaciones, el proyecto de ley 1.162/02 presentado por el suscripto en el año 2002, ha perdido estado parlamentario.

Teniendo en cuenta la caducidad del referido proyecto, y el hecho de que el mismo persigue llenar un vacío normativo en materia de interés general, y considerando que el mismo ha tenido un intenso tratamiento parlamentario en el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Minería, Energía y Combustibles, con activa participación de los sectores interesados y autoridades gubernamentales del área de Energía, es que con modificaciones producto del enriquecimiento del proyecto original, vengo a presentar un nuevo proyecto de marco regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo.

Como lo afirmáramos en oportunidad de presentar el proyecto original, el artículo 87 de la ley 24.076, Marco Regulatorio del Mercado Gasífero, establece que la regulación para el Gas Licuado de Petróleo –GLP–, se efectuaría mediante el dictado de una norma legal especial, y pese a la previsión legal mencionada, durante toda la década de 1990 no se reguló al respecto, habiendo coadyuvado para ello la estabilidad cambiaria y la vigencia plena de la Ley de Convertibilidad, que determinó una estabilidad en los precios finales del GLP, con lo cual los consumidores tenían parámetros ciertos para comparar productos y servicios, y no se advirtiera la necesidad de regular la materia pese al imperativo legal.

La salida de la convertibilidad cambiaria, generó un incremento del precio del producto y al no ser un mercado regulado, se verificó la existencia de una grave y evidente desprotección de los consumidores respecto de los parámetros mínimos que se le deben garantizar en función de las previsiones de la ley 24.240 y de la naturaleza del producto, que al ser un insumo básico de muchos hogares de escasos recursos y actividades industriales diversas, necesariamente amerita una adecuada regulación en orden a la calidad de producto, garantía de abastecimiento, precio justo y razonable, publicidad e información adecuada, libre acceso y universalidad del servicio.

El GLP, gas licuado de petróleo, propano o butano envasado a alta presión, representa un mercado que en su franja de consumo domiciliario es vendido en garrafas u otros envases y tiene como destino la provisión del gas a más de cuatro millones de hogares argentinos, en zonas urbanas y rurales, donde a los prestatarios del servicio público de gas natural por redes les resulta antieconómico la construcción de redes.

En la región del nordeste argentino (provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), en varias poblaciones rurales y pequeños y grandes centros urbanos alejados de los principales gasoductos o, aun próximos a los gasoductos troncales, sin bridas de conexión a los mismos, en el Noroeste argentino (Salta, Tucumán, Santiago, Catamarca, Jujuy) y aún en la Patagonia donde los consumos residenciales justifican desde lo económico el de-

sarrollo de redes de distribución, pero donde no se han desarrollado redes troncales, el GLP transportado a granel y reinyectado en redes de distribución domiciliar es una variable de distribución. Así también verificamos que el GLP es la única alternativa para la atención a población rural, mediante los llamados “zeppelines”.

La restante porción de la demanda es de tipo industrial y petroquímico o se exporta. El GLP asimismo, constituye una excelente forma de agregación de valor del gas, y permite exportarlo en estado líquido, a grandes distancias, dinamizando el mercado gasífero.

De conformidad con la importancia y extensión del uso del GLP, y en atención a los derechos de los consumidores, se hace necesaria la sanción de una ley específica, de modo de garantizar a los participantes de la industria una sana y libre competencia y a los consumidores sus derechos constitucionales, y también propender al desarrollo del GLP, y a la diversificación de su uso, como lo es el GLP automotor, u otros.

Analizada la pertinencia del dictado de la normativa, resulta pertinente reflexionar sobre algunos aspectos esenciales, tales como la determinación del interés público que tiene la actividad, para así poder tener un marco jurídico idóneo a fin del dictado de las regulaciones técnicas y económicas necesarias y la priorización del GLP para uso domiciliario.

No escapa a nuestro análisis que la desregulación del mercado de los hidrocarburos está ya pautada por los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.212 y 1.589/89, por lo que la materia prima es producida tanto por los concesionarios de explotación de hidrocarburos como por la actividad destiladora, con arreglo a la ley 17.319, decretos de desregulación y contratos de concesión, sin perjuicio de lo cual advertimos que no existe normativa alguna en las demás etapas de su proceso de comercialización, pues luego de la producción se encuentran los procesadores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y fundamentalmente los consumidores.

La realidad del mercado del GLP, nos indica que el mismo es procesado en varias plantas en el país, y de allí se transporta y vende a granel, en el mercado interno a casi un centenar de fraccionadores en un esquema de absoluta desregulación económica, quienes lo envasan y comercializan con marca o leyenda propia o de terceros. Este hecho hace que la regulación a diseñar contemple acabadamente la situación jurídica existente en el mercado actual, para no lesionar derechos y obligaciones adquiridos por los distintos participantes del mercado.

Por ello, se propone que este marco regulatorio esté en manos de una autoridad de aplicación con capacidad operativa y fundamentalmente técnica, considerando entonces apto el criterio que sea la

Secretaría de Energía de la Nación quien ejerza esta acción contando con la capacidad de delegar en el Enargas los aspectos de control y fiscalización técnica, dada la experiencia y disposición regional del organismo, ya que tiene presencia en todas las regiones y cuenta con personal idóneo para regular aspectos técnicos y fiscalizar la actividad. Los lineamientos de política en la materia, quedarán entonces en manos del Poder Ejecutivo nacional.

En cuanto a la regulación económica considero necesario un rol activo la autoridad de aplicación, a efectos de que ésta determine una metodología para fijar un valor referencial del producto destinado al consumo domiciliario, para que sirva de referencia indicativa ante posibles excesos en la fijación del precio por parte de los actores del mercado. Asimismo el resto del mercado quedará completamente desregulado para otros usos y aplicaciones que el GLP tiene en la actualidad o tenga en el futuro. De este modo se protegerá en forma real y efectiva al usuario, que en la mayoría de los casos no tiene alternativas de elección, dependiendo de un solo proveedor de GLP, mientras que quien tenga opción, ya sea porque consume sobre el umbral volumétrico a determinar por la autoridad de aplicación o porque voluntariamente efectúa otra elección, quedará dentro del ámbito del mercado desregulado.

En el entendimiento que los fraccionadores de GLP en el país muestran un índice de competencia que no se ha dado en otros sectores energéticos, y ante un mercado que está altamente concentrado en la producción, se considera que esta dispersión comercial es por demás saludable, y conforme a ello la legislación proyectada tiende a posibilitar su mantenimiento y aún propiciar una mayor competencia, de modo de garantizar el acceso a otros competidores y permitir al consumidor la posibilidad de elegir y, en caso de no ser posible la elección, garantizar un precio justo y razonable del producto.

Este principio que entiendo es compartido por los principales actores del mercado, sin ninguna duda abre el debate en relación a qué sector de la actividad tiene que regularse desde lo técnico y económico.

Pese a ser conocedor de la existencia de otras iniciativas parlamentarias en la materia, la necesidad de propiciar el tratamiento del presente proyecto se fundamenta entre otros aspectos en el delineado de las potestades y calidad de la autoridad de aplicación y, a diferencia de otras posiciones, en el entendimiento que siempre debe haber un titular responsable del envase y su llenado, ello como necesario resguardo de los derechos y obligaciones de los diferentes participantes del mercado y fundamentalmente de los consumidores.

En el caso de los fraccionadores que sean propietarios de los envases, deben ser ellos quienes tengan el derecho a descartar los envases y la obligación de retirar los que no reúnan las condiciones

de seguridad que fije la reglamentación. Esos envases, deberán ser dados de baja mediante un trámite que establecerá la reglamentación y fiscalizará la autoridad de aplicación. Así se determina claramente que el fraccionador que procede al llenado es responsable por los envases que entrega al mercado, sean propios o de terceros, con lo que se clarifica este aspecto importante que hace a la seguridad jurídica de los consumidores.

También se advierte necesaria la regulación económica para aquellos que tengan contratos de concesión de distribución de GLP, otorgado por la autoridad competente, y la misma, fijará los parámetros de regulación económica que garanticen al consumidor dentro del área de concesión acceder al producto a un precio justo y razonable, en función de los costos de producción y comercialización y una renta razonable, contemplando también las necesarias inversiones que se deben realizar en el sector. En todos los casos, el presente proyecto prevé la posibilidad de intervención de terceros que quieran entrar en el área de concesión, pudiendo éstos competir con los distribuidores con contrato, como una forma de optimizar naturalmente y por las reglas del mercado el sector.

Asimismo, se prevé el acceso abierto a la capacidad ociosa de los activos de almacenaje, en términos claros y precisos, de modo de posibilitar que un tercero, pueda hacer uso del servicio, con tarifas pautadas por la autoridad de aplicación o a precio convenido con el prestador del servicio, para así garantizar la mejor utilización y rentabilidad de los recursos económicos existentes en el mercado nacional y, con ello, posibilitar que terceros puedan desconcentrar el mercado mediante la captación de consumidores, y tercerizar, sin grandes inversiones, otros aspectos de la cadena de valor agregado, ello en coincidencia con idéntica iniciativa de los propios participantes del sector.

Considero que resulta clave que un sector estratégico como el hidrocarbúrico y en particular el del GLP, alcance definitivamente mecanismos previsibles para su funcionamiento, a efectos de desterrar los altibajos en materia de precios sobre el producto destinado a la franja residencial de consumo, siendo necesario para ello regular de manera ordenada tanto el aspecto técnico como el de seguridad del servicio y la previsión económica de los actores del sector, a fin de alcanzar en el mediano plazo mayor participación de estos en un marco de competencia y brindando a la autoridad de aplicación, las herramientas necesarias para fiscalizar y controlar las acciones en cada uno de los segmentos del mercado.

Por último, atento la previsión que la responsabilidad queda en manos de quien llena el envase, pudiendo o no coincidir con quien detenta el dominio del mismo, se crea un registro de envases de modo de poder garantizar el canje de los mismos y hacer un efectivo seguimiento, según titularidad y

estado, entendiendo que este aspecto es esencial, ya que clarifica la responsabilidad en materia de seguridad y calidad, en cabeza del fraccionador, al ser éste quien manipula el envase y el GLP y quien debe adoptar los resguardos necesarios para que el producto sea comercializado en condiciones de seguridad y óptima calidad.

La historia reciente sin normativa específica para el sector, nos muestra como en cada instancia correspondiente a picos en el consumo del producto, este presenta aumentos que impiden acciones previsibles, a fin de asegurar el aprovisionamiento normal del mismo, llegándose en el caso de los usuarios residenciales, a afectar el normal abastecimiento del insumo energético a los hogares de más bajos recursos, determinando la intervención del Estado, a fin de subsidiar los volúmenes faltantes, acción ésta que sería innecesaria si se contara con mecanismos claros y transparentes para la transferencia del producto, a lo largo de los segmentos del mercado.

Por lo expuesto señor presidente, es que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.

Marcelo A. H. Guinle.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

DECLARACION DE SERVICIO PUBLICO DEL GAS LICUADO DE PETROLEO

Artículo 1º – Declárase servicio público la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que garantice la universalidad del servicio para todos aquellos que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Rubén Giustiniani. – Vilma Ibarra. –
Carlos A. Prades.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los sectores de más bajos recursos de la República Argentina, así como millones de habitantes del interior del país, son consumidores de gas licuado de petróleo, producto desregulado, que sufrió aumentos de más del 150 por ciento desde la salida de la convertibilidad a la fecha.

Así, la garrafa de diez kilos, que en el 2001 costaba entre 8 y 9,50 pesos, hoy es comercializada por las petroleras a un valor que oscila entre los 22 y los 25 pesos, transformándola en un produc-

to altamente oneroso para los grupos que lo consumen (cuyos ingresos se han visto congelados o ligeramente incrementados sólo para quienes gozan del privilegio de formar parte de la mano de obra ocupada y no flexibilizada con contratos temporarios).

La realidad nos demuestra que el gas licuado de petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico cartelizado que abusa de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales existentes en la República Argentina y la apropiación privada de la renta hidrocarbúrrica de recursos naturales no renovables.

Este producto representa una necesidad primaria fundamental para los grupos que lo consumen, al igual que los alimentos, el suministro de agua, la corriente eléctrica y el gas natural, entre otros. “El acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la participación de la sociedad”.¹

Es decir que la relación desigual existente entre el consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige la presencia del Estado para controlar y asegurar la competencia y la defensa del consumidor.

Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Nada de todo ello ocurre en la República Argentina con la producción, distribución y venta del gas licuado de petróleo, que se halla sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un oligopolio, no sujeto a regulación alguna, ni en el plano sectorial, ni en cuanto a la acción, frente a las históricas omisiones en el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156).

Tal situación denota un gravísimo incumplimiento del Estado al mandato constitucional, toda vez que el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos...”.

¹ Bidart Campos, Germán: *Manual de la Constitución reformada*, tomo II, página 93, Ediar 2000.

Por ello es que en cumplimiento de dicho mandato constitucional presentamos este proyecto de ley para poner fin a la injusta realidad que padecen millones de personas frente al verdadero latrocinio cometido por el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia que el camino seguro para terminar con tal injusticia es la declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.

Esta declaración no sólo acabará con los abusos del mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos sectores del colectivo social que, como consumidores de gas licuado de petróleo, observan impotentes y desamparados el continuo aumento de ese servicio, mientras que el gas natural, consumido por los sectores medios y altos de la sociedad, goza, por ahora, del paraguas protectorio del servicio público.

En definitiva, el carácter de elemento esencial que tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional que tiene el Estado nacional de velar por el bienestar general.

El derecho de los consumidores de gas licuado de petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio público se funda, además, en los diversos instrumentos en materia de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

La necesidad de declarar el consumo del gas de garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes (artículo 19 inciso 75 Constitución Nacional), lo que supone la ponderación de prioridades básicas de las personas que deben ser satisfechas.

En igual sentido, el inciso 19, del artículo 75, de nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso económico, uno de los aspectos del desarrollo humano, con justicia social. Este mandato obliga claramente al Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad brindándoles una protección efectiva mediante un acceso fáctico a condiciones igualitarias de prestaciones de servicios, situación que hoy no ocurre puesto que los que más tienen gozan de la tutela del servicio público y los que menos tienen no.

El resguardo constitucional al derecho al consumo de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas. Así, además del deber protectorio por parte del Estado que surge del artículo 42 de la Constitución Nacional, el inciso 23 del artículo 75 establece que el Congreso de la Nación debe “le-

gislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos...”.

En resumen, declarar servicio público al gas licuado de petróleo es una obligación prioritaria del Estado nacional, puesto que implica resguardar los derechos de los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a la salud, a la vida y a la calidad de ella, a la seguridad, a sus intereses económicos, a las condiciones de trato equitativo y digno, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia en el mercado, al control de los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo de bienes y el uso de servicios y a la lealtad comercial.

Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos no basta con la sola declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, sino que es necesario también que el Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema democrático, participe en el mercado para evitar las injustas desigualdades y para mantener el equilibrio en las relaciones que puedan desprenderse del libre juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio para quienes no tienen la posibilidad de acceso a la red de gas natural.

Es decir, que, al ser la República Argentina productor de este fluido, los costos a tener en cuenta deben ser los reales del producto en el plano doméstico (prácticamente no afectados por la maxidevaluación) y no los de otra parte del mundo, lo que contribuirá, sin dudas, a abaratar su precio al público. “Dolarizar” el precio del gas natural (tanto del que se provee por redes como, indirectamente, el GLP) sería desconocer que los restantes precios de la economía, en particular el salario, no han sido dolarizados. Cabe preguntarse por qué el gas natural o GLP en el mercado interno debe acompañar su precio internacional cuando no sucede lo propio con los salarios.

La ley propuesta, en definitiva, implica frenar la profundización de las desigualdades que sufre la población empobrecida en materia de consumo de un elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, implica la instrumentación de políticas responsables de inclusión social por parte del Estado nacional.

Por los motivos expuesto, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.

Rubén Giustiniani.

V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGIMEN REGULATORIO
PARA EL DESARROLLO COMERCIAL
DE LA INDUSTRIA DE GAS LICUADO
DE PETROLEO (GLP)

CAPÍTULO I

Objeto y alcances

Artículo 1º – La presente ley establece el marco regulatorio de las actividades que intervienen en el circuito de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), comprendiendo aquellas relativas a la provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte y distribución, las que se regirán en todo el ámbito del territorio nacional por las disposiciones emergentes de la presente ley.

Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por gas licuado de petróleo (GLP) a las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presión normales, compuestas predominantemente por propano o butano, sus isómeros y derivados no saturados, separados o en mezclas, que son mantenidas en estado líquido bajo presión en recipientes herméticos.

Art. 3º – Quedan exceptuadas del alcance de la presente ley y su reglamentación, las actividades relacionadas con la producción de GLP y producciones asociadas, comprendidas en la ley 17.319 o aquella normativa que en el futuro la sustituya.

Art. 4º – Constituyen objetivos de la presente ley, resguardar la transparencia y seguridad en el funcionamiento del circuito de comercialización del mercado de GLP en todo el territorio nacional, incentivando la eficiencia productiva y el comercio justo por el lado de la oferta y asegurando garantías de calidad y suministro con cumplimiento de normas técnicas y precios justos, por el lado de la demanda.

CAPÍTULO II

De los sujetos comprendidos

Art. 5º – Serán sujetos activos alcanzados por la presente ley aquellos agentes económicos que intervienen en el circuito de comercialización de la industria del gas licuado de petróleo –GLP–, asumiendo el rol de fraccionadores, almacenadores, transportistas, distribuidores, prestadores de servicio de puertos y grandes consumidores.

Art. 6º – Serán sujetos pasivos alcanzados por la presente ley, toda persona física o jurídica usuaria de gas licuado de petróleo (GLP) para consumo final, mediante la adquisición de microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques a granel o redes, incluidas aquellas personas físicas o jurídicas que por su ele-

vado consumo cuenten con ductos y/o instalaciones fijas aprobadas por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO III

De las actividades comprendidas

Art. 7º – Las actividades alcanzadas por la presente ley están relacionadas con la provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte, distribución y almacenamiento o despacho por puertos o dárseñas de gas licuado de petróleo.

Art. 8º – Las actividades comprendidas en el artículo anterior serán ejercidas libremente, con sujeción a las normas de seguridad, calidad y respeto del medio ambiente, que dicte la autoridad de aplicación y otras disposiciones en vigencia, que complementen el espíritu de la ley.

Art. 9º – Determinase un régimen de acceso abierto en forma permanente, por el término de diez (10) años, aplicable hasta un cuarenta por ciento (40 %) de la capacidad instalada destinada a las actividades del mercado de GLP:

- a) Servicio de puerto;
- b) Almacenaje a granel superior a la propia necesidad en puerto o en derivaciones del poliducto o propanoducto;
- c) Transporte por ductos.

Art. 10. – Créase el Registro de Comercializadores, a efectos de regular las transacciones a gran escala, a granel o importaciones de gas licuado de petróleo.

Art. 11. – Las transacciones a gran escala, a granel o importaciones de gas licuado de petróleo tendrán seguimiento a través del Registro de Comercializadores.

Art. 12. – El transporte de GLP deberá disponer las previsiones necesarias en materia de seguridad y preservación ambiental, al igual que las actividades de fraccionamiento, distribución, almacenaje y abastecimiento.

Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente ley dispondrá las previsiones y reglamentaciones en materia de seguridad y preservación ambiental, para autorizar todo tipo de medio de transporte de GLP en complementación a las disposiciones emergentes de las leyes 24.653, 17.319 y 24.076.

Art. 14. – Las normas de seguridad, calidad y preservación ambiental para habilitar las actividades de fraccionamiento, distribución y almacenaje, referidas al llenado de envases para disposición a distribuidores o usuarios consumidores, el abastecimiento a puntos finales de venta al consumidor y el consumo en gran escala, serán dictados por la autoridad de aplicación, respetando los criterios de legislación ambiental en la materia.

Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables civil, penal y administrativamente por el ejercicio de

su actividad, por todos los envases que circulen con su identificación de llenado, en todas las etapas del circuito de comercialización, hasta el usuario consumidor, debiendo contratar seguro para el resguardo de la actividad.

Art. 16. – A efectos del artículo anterior, los fraccionadores estarán obligados a abonar proporcionalmente a su participación en las compras totales del producto, la prima de un seguro común que contratará la autoridad de aplicación y que cubrirá los riesgos por el total del parque de envases habilitados por las empresas fraccionadoras, incluidos los tanques fijos, instalados en el domicilio de los usuarios.

Art. 17. – Los distribuidores serán responsables civil, penal y administrativamente, por el ejercicio del servicio de abastecimiento a los puntos finales de venta al consumidor, como comercios minoristas, de ramos generales o centros de abastecimiento, debiendo cumplir con las disposiciones de las jurisdicciones municipales y/o provinciales en materia de higiene y seguridad y estarán obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil, que cubra los riesgos propios de la actividad.

Art. 18. – Los grandes consumidores sólo podrán almacenar GLP para consumo propio, debiendo contar con instalaciones adecuadas para tal fin, conforme a disposiciones de la autoridad de aplicación y normas municipales de zonificación.

CAPÍTULO IV

De aspectos específicos de la actividad

Art. 19. – Los sujetos alcanzados por la presente ley deberán operar y mantener sus instalaciones equipos, envases y demás elementos que fueren de uso comercial, cualquiera fuere el título de dicho uso, aun cuando no los utilicen y hasta su destrucción total, siempre que le siguieren perteneciendo, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el medio ambiente.

Art. 20. – Las instalaciones afectadas a la actividad de comercialización del GLP, en cualquiera de sus actividades operativas, estarán sujetas a inspecciones, revisión y pruebas periódicas dispuestas por la autoridad de aplicación.

Art. 21. – Créase el Sistema Nacional de Envases de GLP (Sinegalp), cuyo objetivo será regular el tratamiento operativo del parque de garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad y habilitar el fraccionamiento de gas licuado de petróleo.

Art. 22. – La autoridad de aplicación reglamentará y administrará los procedimientos y normas de funcionamiento relativas a la habilitación, intercambio, reparación y sustitución de envases de GLP.

Art. 23. – La autoridad de aplicación podrá intervenir a fin de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o indebidamente discriminatorias en-

tre los distintos actores, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP.

Art. 24. – Determinase para los servicios prestados, el establecimiento de tarifas máximas y márgenes de fraccionamiento y distribución, revisables periódicamente, conforme a criterios de cobertura de costos operativos razonables atendiendo las condiciones de las diferentes regiones del país.

Art. 25. – Los agentes económicos del circuito de comercialización de la industria del GLP podrán reducir la rentabilidad calculada en sus tarifas máximas o los márgenes indicativos, pero no podrán vender por debajo de sus costos medios anuales, debiendo presentar ante la autoridad de aplicación, los cuadros tarifarios, tasas y otras cargas a aplicar, con detalle de información respecto a la composición y clasificación del mercado a abastecer, a efectos de proceder a su posterior publicación.

Art. 26. – Los precios del GLP serán establecidos por la autoridad de aplicación, sobre la base de los siguientes mecanismos:

- a) A la salida de las plantas de tratamiento, refineras y petroquímicas, o cualquier boca de provisión mayorista a granel, el precio será de libre determinación según las condiciones de mercado, no pudiendo exceder el promedio de los precios de exportación en cada punto de exportación, debiendo establecerse la metodología de cálculo de la banda de precios promedios de exportación e importación y los índices de ajuste por las escalas, calidad de productos y variación estacional;
- b) A los usuarios finales, en forma regulada con banda de precios mínimos y máximos para cada región del país, en comparación con los precios de los países limítrofes y los precios internacionales. El mínimo costo será compatible con la continuidad de abastecimiento, sin desmedro de la calidad del producto, peso exacto, seguridad del envase y operación;
- c) Los precios de venta del GLP en envases de fraccionadores a distribuidores, y de distribuidores a mayoristas, incluirán los costos de adquisición, operativos, de almacenaje y otros que demande la actividad, considerando un margen razonable de rentabilidad.

CAPÍTULO V

De las limitaciones a la actividad

Art. 27. – Determinase que a los efectos de la presente ley:

- a) Ningún tipo de empresas, o grupo de ellas, perteneciente al circuito de comercialización y con alcance de la presente ley, que con-

traten directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante de los mismos, podrán tener una posición dominante en el mercado, de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en sociedades habilitadas como transportadoras, fraccionadora, distribuidora o transportista de la industria del GLP;

- b) En casos de existir participaciones en el grado y forma que permite el presente artículo, los contratos entre sociedades vinculadas que comprendan diferentes etapas en la industria del GLP deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación, la que podrá rechazarlos, cuando el interés de los consumidores se vea afectado.

CAPÍTULO VI

Autoridad de aplicación

Art. 28. – Determinase como autoridad de aplicación de la presente ley al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), creado por la ley 24.076, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

Art. 29. – Serán funciones generales de la autoridad de aplicación:

- a) Definir los sujetos y actividades que intervienen en el circuito de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP);
- b) Dictar las normas aplicables y establecer las condiciones a las que deberán ajustarse las actividades comprendidas y los actores participantes, dentro del mercado de GLP;
- c) Establecer las normas adecuación y coordinación sectorial, que afecten la dinámica de los eslabonamientos comerciales del mercado de GLP a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones de acceso y precios al mercado;
- d) Establecer precios testigos y regular y aprobar las tarifas, márgenes y precios presentados por los distintos sujetos activos intervinientes en el circuito de comercialización de la industria del GLP;
- e) Disponer las condiciones de autorización para los registros y habilitaciones dispuestas por la presente ley;
- f) Establecer los lineamientos de las actividades derivadas del mercado de la industria del GLP en todas sus dimensiones operativas, de modo de garantizar la eficiencia en el servicio, la equiparación de oportunidades regionales para el acceso al servicio y al comercio justo en todo el circuito de comercialización;
- g) Velar por la protección de la propiedad, la seguridad pública y la protección del medio

ambiente en la construcción de la infraestructura física del sistema comercial y en la operación de los envases destinados al uso de GLP;

- h) Disponer las sanciones y penalidades que se deriven del incumplimiento de las normas y el espíritu de la presente ley, independientemente de las contempladas en el Código Penal, promoviendo su aplicación ante los tribunales competentes;
- i) Requerir información para verificar el cumplimiento de la presente ley;
- j) Ordenar, procesar y publicar toda información y normativa relacionada con la industria del GLP;
- k) Reglamentar y controlar el cumplimiento de la presente ley, por parte de los sujetos alcanzados.

CAPÍTULO VII

Comisión de arbitraje

Art. 30. – Créase a los efectos de garantizar el cumplimiento de la presente ley, una comisión de arbitraje conformada por dos (2) representantes, un (1) miembro titular y un (1) suplente de: la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, Confederación General de la Empresa, la Defensoría del Pueblo y usuarios organizados del servicio.

Art. 31. – La Comisión de Arbitraje tendrá las funciones de seguimiento, evaluación y mediación ante conflictos sectoriales, considerando para sus dictámenes, el criterio de preservar el espíritu de la presente ley, en materia de igualdad de oportunidades, comercio justo, seguridad, calidad, eficiencia y garantía de abastecimiento.

CAPÍTULO VIII

Aspectos generales

Art. 32. – La presente ley es de orden público.

Art. 33. – Derógase toda norma anterior que se oponga a los objetivos de la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.

Art. 34. – Invítase a las autoridades provinciales a adherir a la presente ley, pudiendo la autoridad de aplicación delegar progresivamente en las jurisdicciones provinciales y municipales el ejercicio de aquellas funciones que se consideren compatibles con su competencia.

Art. 35. – La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el término de 90 días a partir de su vigencia.

Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 24.076, dictada en 1992, establece en su artículo 87 que “el marco regulatorio de la actividad de gas licuado será motivo de una ley especial”.

A doce años de incumplimiento de lo normado, las consecuencias de este vacío colocan a las pymes del sector en una situación de indefensión por cuanto la ausencia de un marco regulatorio señala en el circuito integral la existencia de actores diferentes, siendo la política del sector más desfavorable para los segmentos que se desenvuelven en las economías regionales donde no existe el producto distribuido por redes, constituyendo un mercado cautivo de consumidores de menores ingresos.

A la diferente capacidad de apropiación de los ingresos por parte de las pymes vinculadas al sector, se suman las particularidades de los usuarios que generalmente pertenecen a zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales o zonas urbanas marginales que carecen de acceso alguno a la red de gas natural.

Las diferentes instancias que reunieron en el seno de este Congreso de la Nación a las pymes del sector (audiencias públicas, seminarios internacionales organizados por el Instituto General Mosconi, donde se consensuó el proyecto, reuniones conjuntas con cooperativas del área, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Córdoba, Misiones, Chaco y Corrientes) dieron como resultado un conjunto de acciones demandando la urgencia del cumplimiento de lo normado en la ley 24.076, máxime reconociendo que la sanción y promulgación de la ley 23.696 de reforma del Estado y la 23.697 de emergencia económica marcaron un hito respecto del papel del Estado, delimitando su intervención en cuanto a servicios públicos, como diseñador de políticas, regulador de actividades esenciales y el ejercicio de contralor de su desenvolvimiento.

En el marco de la legislación vigente, la industria del gas licuado de petróleo (GLP) se desarrolló desde su origen a través de la intervención directa del Estado por intermedio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.

La ley 24.076, en su capítulo II dispone la privatización de Gas del Estado y la reglamentación de la actividad de gas natural, a la que se suman las normas complementarias y los contratos de licencia otorgados a empresas distribuidoras y transportadoras del producto, asignándose como autoridad de aplicación al Ente Nacional Regulador del Gas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pasa a ser YPF S.A. al privatizarse mediante la ley 24.145, ordenándose de esta manera dos sectores básicos de la industria, el petróleo y el gas natural.

El consumo interno de gas licuado alcanza a 1,3 millones de toneladas por año, con aproximadamente

4 millones de usuarios, de los cuales el 40 % pertenece a las áreas marginales del Gran Buenos Aires, con un consumo promedio de 27 kg por habitante. El 42,6 % de la población total, que actualmente está en condiciones de pobreza, es depositaria, en orden al peso económico que dentro de la canasta familiar registra este servicio básico, de los perjuicios de un mercado aún no regulado.

Los precios del gas licuado en el mercado minorista fueron incrementados en el último año por efectos de los desequilibrios de la devaluación. A febrero de 2002, en el caso del GLP envasado en garrafas de 10 kg se incrementaron en un 40 % respecto al mes de febrero de 2001, en tanto que el GLP envasado en cilindros de 45 kg aumentó un 33 % promedio respecto al mes referido.

La presente iniciativa, representada por tercera vez en el ámbito del Congreso Nacional, propone un marco general de regulación de la actividad derivada del circuito de intercambio de la industria del gas licuado de petróleo, enriquecido con observaciones del Instituto de la Energía General Mosconi, como asimismo, las sugerencias derivadas de las pymes del sector en orden a la comprensión de objetivos y alcances, sujetos intervinientes, regulación de actividades comprendidas y sus aspectos específicos, así como también las limitaciones a la actividad y la creación de una comisión de arbitraje, que en forma complementaria al rol de la autoridad de aplicación, intervendría en acciones de seguimiento, evaluación y mediación de conflictos sectoriales.

Se trata de responder, desde este Senado, a una demanda que pretende revertir la inequidad de las fuerzas que intervienen en el sistema, agravada por la relación de tamaño entre empresas y a la heterogeneidad de los espacios regionales, a través de un marco legal que incorpora previsiones de abastecimiento, seguridad, calidad, y eficiencia en los distintos eslabones del circuito de comercialización para proteger al usuario consumidor.

Para la comprensión del circuito de comercialización de la industria del gas licuado de petróleo, y a efectos del cumplimiento de los objetivos, se determinan pautas que priorizan la igualdad de oportunidades en cuanto a acceso al mercado, el comercio justo y servicio eficiente, evitando el incentivo al monopolio y a la transferencia de riesgos hacia el segmento de destinatarios, que como señalamos, conforma un mercado cautivo, con mayor porcentaje de ubicación en las zonas más alejadas del país.

La presencia del Estado, en este marco, debe ser en el sentido de garantizar la transparencia de los mercados en competencia, en razón de las transferencias a entidades privadas de los servicios públicos con carácter de monopolios naturales, hecho que requiere que la regulación se dirige a crear condiciones de emulación de la competencia, especialmente donde ésta no resulta posible.

El Estado como regulador de la actividad y organismo de contralor, debe actuar en salvaguarda de los intereses de los usuarios siendo esta una función irrenunciable.

En orden al diseño de políticas, se debe trabajar con criterios y procedimientos operativos, de modo que las empresas intervinientes adecuen sus prácticas comerciales a nuevos lineamientos de modo que dentro de un mercado de competencia, se prioricen parámetros de calidad, eficiencia y equidad.

No es menos importante, analizar la ubicación institucional del órgano regulador, el que debería conservar sus condiciones de autarquía, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, ajustando su accionar a los principios y normas regulatorias, asegurando la prestación de los servicios en condiciones de confiabilidad, competitividad, igualdad, libre acceso, con tarifas justas y razonables adecuadas a la calidad exigible de prestación, protegiendo los derechos de los usuarios y garantizando el suministro a largo plazo.

Visualizados los actores que intervienen en el mercado del GLP en sus distintas actividades e identificados los problemas críticos a lo largo del circuito, el análisis del marco regulatorio debería incorporar cambios estructurales, habida cuenta que los problemas de mercado son del mismo orden.

En resumen, el marco debe tener como objetivos:

- Fomentar la competencia.
- Maximizar el bienestar social.
- Regular mecanismos de equidad, donde se presenten situaciones de monopolio natural.
- Desagregar de los servicios y regulación de la industria conforme a las diferentes etapas.
- Propenda un correcto diseño de tarifas, que considere los derechos adquiridos de todos los actores.
- Fijación de precios máximos para los sectores más sensibles.
- Garantizar la universalidad del servicio.
- Establecer estrictos controles y penalidades para evitar desequilibrios en la integración vertical de la industria.
- Evitar la posibilidad de socializar los riesgos hacia la demanda final.
- Concentrar los esfuerzos de regulación en las etapas monopólicas de la actividad.
- Determinación y control de precios y calidad en toda la cadena de producción y comercialización del producto que prevengan prácticas que configuren abuso de posición dominante en el mercado.
- Lograr libre acceso al mercado en el sistema de transporte, fraccionamiento y distribución.
- Propender al suministro del bien, conforme a la demanda, impidiendo la falta de suministro como medio de control del circuito.

Consideramos que nuestro país, debe encarar un proceso de reingeniería y fortalecimiento de la organización de políticas y gestión regulatoria relacionadas con la prestación privada de los servicios públicos, dada la evidencia de debilidades institucionales que rigieron hasta el presente en esta materia, siendo necesario incorporar las recomendaciones que se desprenden de los desarrollos teóricos y el análisis de la experiencia local como la de otros países que han sido expuestas en este ámbito.

Surge en este momento en que las capacidades, más que nunca, deben estar dispuestas para hallar caminos que conduzcan a la superación de la crisis que como la historia lo demuestra, no sólo resultan recurrentes sino de mayor intensidad, el compromiso de unir vocaciones de trabajo.

A nuestros pares, en el Congreso de la Nación, reclamamos el cumplimiento de una deuda que como se señala data de 12 años.

Si la propuesta que se ha presentado no se concilia con el interés de las pymes vinculadas al sector de gas licuado de petróleo, habremos equivocado el camino, y si no obramos en orden al principio que la ley 24.076 determina, también estamos cometiendo un error, un incumplimiento del cual no deseamos ser cómplices.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Mirian B. Curletti.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Instrúyese a la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para que en el marco de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, establezca una tarifa de referencia para las garrafas y cilindros de gas en todas las etapas de comercialización de las mismas, debiendo dicha tarifa variar y guardar equivalencia con las fluctuaciones en el precio del gas en boca de pozo.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcelo E. López Arias.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto atender a la injusta situación que vive aproximadamente el 45 % de la población nacional, que por no tener acceso al gas distribuido por cañerías y/o gasoductos, se ve en la necesidad de consumir gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas o cilindros, habiendo tenido que afrontar desde la devaluación de

nuestra moneda un incremento en el precio de los mismos de aproximadamente 150 %, no habiéndose visto alcanzados estos consumidores por los beneficios de la ley 25.561 de emergencia cambiaria, administrativa, financiera y económica que estableció la desindexación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos.

El gas licuado de petróleo constituye en la actualidad uno de los combustibles más utilizados para uso residencial por los hogares argentinos, en muchos casos imposibles de sustituir y destinado a satisfacer necesidades primarias de la población.

Este combustible tiene un fuerte carácter social, puesto que es consumido por casi la mitad de los hogares del país, pertenecientes en su mayoría a los estratos más pobres de la sociedad argentina. En el país hay aproximadamente cuatro millones y medio de hogares que consumen GLP, y los lugares geográficos donde se consume son aquellos en los que se concentra la población de menores ingresos, que deben destinar altos porcentajes de sus ingresos a la compra de garrafas o cilindros de GLP.

Dispuesta la privatización de la empresa Gas del Estado se produjo la liberalización de un mercado que históricamente se desarrolló en un contexto regulado por la empresa estatal que, entre otras cosas, fijaba el precio de venta del GLP.

La devaluación tornó más interesante la exportación del gas en garrafas y cilindros que la venta en el empobrecido mercado interno. El incremento del valor de la garrafa y el cilindro de GLP a partir de la devaluación fue superior al de la inflación acumulada al del incremento de la canasta básica alimentaria y al de la canasta básica total.

Es importante recalcar también que la producción nacional de GLP se encuentra altamente concentrada en pocas empresas que producen casi la totalidad de dicho combustible en la Argentina, evidenciándose un mercado de características oligopólicas que permite a dichas empresas fijar los precios de este producto con total arbitrariedad.

Por todo lo expuesto es que se hace imprescindible la implementación de medidas como la propuesta en este proyecto, para obtener así la necesaria reducción en el valor de las garrafas y un trato igualitario para todos los habitantes del país, por lo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.

Marcelo E. López Arias.

VI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Impleméntese en todo el territorio nacional el programa de acceso al consumo de gas licuado de petróleo, Garrafa Social.

Art. 2º – El programa Garrafa Social estará destinado a subsidiar parcialmente el consumo de gas licuado de petróleo en garrafas de hasta 15 kg a usuarios de escasos recursos económicos que no tengan acceso al servicio de gas natural, debiéndose ejecutar descentralizadamente a través de las provincias y los municipios de todo el país durante un plazo máximo de tres meses al año, en coincidencia con la estación invernal.

Art. 3º – El programa social será financiado con un porcentaje de los fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones que se apliquen al gas licuado de petróleo (GLP), el cual se fijará en la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación para la aplicación de la presente ley en el plazo de quince días, debiendo en la misma incluir como beneficiarios a los siguientes sectores:

- a) Quienes no tengan empleo o beneficio social alguno;
- b) Quienes sean beneficiarios de planes sociales nacionales y/o provinciales básicos que no superen los ciento cincuenta pesos mensuales;
- c) Los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal cuya remuneración neta (una vez efectuados los descuentos de ley) no supere los \$ 400 mensuales;
- d) Los jubilados y pensionados nacionales y provinciales cuya remuneración neta no supere los \$ 450 mensuales.

Art. 5º – Los beneficiarios del programa Garrafa Social deberán acreditar fehacientemente ante los organismos responsables de su ejecución el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al mismo.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Más de 17 millones de argentinos entre los que se cuentan aquellos de ingresos más bajos y por lo general alejados de las redes de gas natural, son los que sufren las peores consecuencias.

Durante los años 2002 y 2003, los productores de GLP vendieron en el mercado interno y a quienes menos recursos disponen a un precio superior a la paridad de exportación, por lo que, a través de este proyecto, se intenta concretar una justa protección hacia quienes más han padecido esta situación de inequidad.

Es innegable que existen grandes sectores con necesidades básicas insatisfechas y excluidos de

elementales beneficios a los que pueden acceder el resto de los ciudadanos.

No puede ignorarse tampoco que estos grupos humanos resultan siempre los más vulnerables cuando las naturales inclemencias del tiempo se hacen presentes, debiendo reconocerse que es durante los meses de invierno cuando más se hace sentir la falta de combustible para uso domiciliario.

El gobierno de mi provincia, realizando un gran esfuerzo se encuentra trabajando y ha presentado a la Legislatura provincial un proyecto de similares características, para atender esta acuciante problemática, habiendo obtenido el mismo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, buscando intentar paliar en parte la situación de amplios sectores de nuestra sociedad, ello pese a la difícil situación económica de mi provincia.

Entiendo, señor presidente, que corresponde a la Nación brindar cobertura a todos los ciudadanos de menores recursos que se ven afectados por las consecuencias del aumento verificado en el precio del GLP y que los aleja de las posibilidades de poder acceder a su consumo, para que sin importar su lugar de residencia puedan gozar de los mismos beneficios.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional ha anunciado el incremento del porcentaje de retenciones que se aplicarán a las exportaciones de GLP, el cual pasará del 5 % al 20 %, dado lo cual creo de estricta justicia que un porcentaje de dichas retenciones sea aplicado a financiar el presente programa, con lo cual cumpliremos con nuestra obligación de velar por el bienestar de la población en su conjunto, compensando a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.

Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, el proyecto que estamos tratando, destinado a crear el marco regulatorio de gas licuado de petróleo, tiene una serie de aciertos metodológicos, pues unifica las coincidencias y concilia las diferencias de los distintos proyectos que respecto al marco regulatorio del gas licuado de petróleo han sido generadas no sólo por los distintos senadores, sino también por muchísimos diputados. Ello ocasionó que en forma previa a su abordaje en el seno de las comisiones de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados se efectuaran repetidas reunio-

nes tratando de encontrar un punto de equilibrio para llevar una respuesta a los usuarios de GLP, prisioneros de un mercado desregulado, con abusos de posición dominante y que generan verdadera zozobra en el marco de nuestro país.

El abordaje del marco regulatorio tiene entonces un condimento muy importante, dado que ninguno de los autores se enamoró de su proyecto; todos participaron en una mesa crítica buscando caminos de coincidencia para encontrar una apretada síntesis de lo posible. La pretensión de obtener este marco regulatorio de la industria del gas licuado es por demás significativa, porque además de sumarse a otros marcos regulatorios, como son el del gas natural y el del mercado eléctrico, está destinado a regular un servicio. El servicio público de gas natural y el servicio público eléctrico deberían garantizar accesibilidad a todos los habitantes de la Argentina; sin embargo, sólo la garantizan a los que están cercanos a la red.

En consecuencia, en la Argentina hay un número muy importante de habitantes, domiciliados fundamentalmente en el NOA, que utilizan esta diversificación de fuentes energéticas, que están muy lejos de la red y que generalmente coinciden con un amplio espectro de la ciudadanía que se identifica con aquellos que efectivamente están no sólo más alejados de la red sino que presentan el grado más alto de carencias. Por consiguiente, significa que esta herramienta que estamos creando en el día de la fecha no sólo es una buena noticia sino que además es la ventana por la cual el Estado nacional puede empezar a menguar asimetrías muy dolorosas que viven vecinos de nuestro país.

A medida que vayamos abordando el tratamiento metodológico de este marco regulatorio vamos a poder informar que muchas de las cosas sobre las que se van a legislar no sólo no son neutras ni pretenden serlo, sino que además tienen una clara dirección y presentan este marco regulatorio en el título IV, artículo 44, siguientes y concordantes. Se trata de una muy buena noticia y una alentadora respuesta a algo que efectivamente ha dividido al país entre los que están en los centros poblados y los que están en la periferia de la Patria. Me refiero, concretamente, a que este marco regulatorio trae como buena noticia la creación de un fondo fiduciario destinado a dos objetivos: el primer elemento es jus-

tamente para salir en auxilio de aquellos que no tienen acceso a la garrafa. Pero fundamentalmente –y por qué no decirlo– la mejor noticia es que se empieza a avanzar en la construcción de redes, porque los usuarios de GLP, que son aquellos donde las redes y las obras de infraestructura no llegan, no son usuarios voluntarios; son concretamente prisioneros de un mercado en donde el desarrollo y la obra de infraestructura no llegó.

Esta triste realidad que implica subsidiar al usuario de bajos recursos no puede empañar el segundo destino del fondo fiduciario, que es la puesta en vigencia de la construcción de redes.

Cuando me refiero a que estamos dando un debate importante no quiero ocultar algunas de las diferencias que tienen y que se han presentado a la hora de discutir este marco regulatorio.

Digo esto porque la discusión se ha centrado en tres aspectos: la creación del fondo, el tema de declarar el servicio de GLP como servicio público o como de interés público y finalmente cuál es el precio de referencia y cuáles los mecanismos que se van a utilizar.

La intención de este debate es terminar de conciliar algunas de las diferencias para ver si en el día de la fecha podemos abordar no sólo el tratamiento en general sino también en particular, porque una de las observaciones ciertas que estaba sobre la redacción originaria del artículo 46, que encerraba una especie de delegación de facultades, la hemos corregido a los efectos de que efectivamente esto esté fuera de discusión.

Cuando hablamos del fondo fiduciario se me ocurre decir que debemos sincerar un debate que tenemos que empezar a hacer alguna vez en la Argentina. La solidaridad la debemos conjugar desde nosotros mismos, no sólo siempre con la plata de los terceros o del Estado. Y no es lo mismo tener gas en la punta del caño que deber transitar kilómetros con una garrafa al hombro. Y tampoco es lo mismo tener un costo preciso en los insumos, un beneficio en la tarifa de gas natural para el industrial que genere productos, que no tener certeza de costos, de abastecimiento ni de volumen. Los usuarios de gas natural debemos reconocer estas asimetrías en perjuicio de quienes en este país viven peor.

Si a los argumentos que nosotros tenemos, le sumamos, además, que los usuarios de gas na-

tural tienen una tarifa congelada –cuestión que no ocurre con los usuarios de GLP–, nos damos cuenta de que estas asimetrías son dolorosas y debemos erradicarlas.

Debo indicar que esto, efectivamente, cala hondo en mi condición de patagónico, porque nosotros somos destinatarios de algunos principios solidarios del país, que entre otras cosas, están destinados a la generación aislada de energía. En efecto, no es lo mismo extender una red para un usuario de Barrio Norte o Palermo que para uno de Bajo Caracoles, porque cuando uno prorratea el costo de la instalación del servicio en este último caso, lo debe hacer entre sólo dos gauchos, ya que no viven más de dos por manzana. Asimismo, a este costo se le debe adicionar el correspondiente al de la generación aislada; esto es con combustible –gasoil– y el valor de los repuestos. En consecuencia, estas personas no tendrían acceso al servicio si no existieran estos aportes solidarios para la generación aislada –que se terminará el día en que el interconectado llegue a la Patagonia–, lo que a su vez permite que estos usuarios tengan una tarifa más o menos similar a la que posee la gente de Barrio Norte.

Entonces, este principio de solidaridad que llega a la Patagonia, y del que efectivamente nosotros usufructuamos, me lleva a conjugar desde adentro que debe extenderse a la gente de Misiones, Corrientes o Chaco, que no son usuarios de red, sino de GLP.

Por lo tanto, este tema debe abordarse con la mayor de las solidaridades posibles, porque hay algunos de un lado que tienen beneficios y otros del otro que no los poseen; y para cambiar, debemos empezar a jugar el principio de solidaridad con nuestro aporte.

El servicio público es un tema que me parece no menor. Se debatió mucho, a lo largo de las diversas reuniones de comisión y plenarios llevados a cabo con integrantes de la Cámara de Diputados, la calificación o no del servicio público de GLP.

Debo compartir con ustedes que, en principio, por más que esté cargado de buenas intenciones, me parece un tremendo error calificar al GLP de servicio público, porque estamos desnaturalizando la concepción del servicio público y alejándonos de lo que pretendíamos cuando abordamos el tema del marco regulatorio.

La calificación de servicio público siempre estuvo reservada a aquellas prestaciones que presentaban características monopólicas, por ejemplo, el transporte y distribución de gas natural y de energía, el servicio telefónico, el abastecimiento de agua, etcétera.

Cuando uno califica a un servicio como público, lo que pretende es asegurar su continuidad, regularidad y obligatoriedad. Entonces, ahora, con este marco de referencia que ha servido como postal comparativa, analicemos qué ocurre con el GLP.

Al respecto, decimos que estamos muy lejos de estar en presencia de un servicio monopólico, porque hay más de setenta empresas que concretamente poseen más de doscientas fraccionadoras a lo largo del país. Si a su vez, a esto lo analizamos desde el punto de vista de la distribución, veremos que se produce una multiplicación geométrica, porque hay más de 100 mil distribuidores en el país, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento son Pymes, pequeños comerciantes o cooperativas, que si calificamos de servicio público al GLP, no sólo los incrementamos los costos, sino que además, las sacaremos del mercado.

Nosotros tenemos 27 mil usuarios de GLP, pero hay provincias que tienen más del 70 u 80 por ciento de usuarios de este servicio. Quienes conocen el interior del país, pregúntense si los distribuidores pueden soportar el costo del seguro, los pliegos de concesiones de licencias y, además, si es posible que ellos se metan en este andamiaje de prestadores de servicios públicos sin generar lo que no queremos generar, que es que ellos efectivamente desaparezcan del mercado.

Porque la otra consecuencia es que si estos distribuidores –repito, más del 60 por ciento de los 100 mil; esto es, más de 60 mil distribuidores– que están radicados domiciliariamente en los lugares más carenciados, en los lugares de menos recursos económicos, desaparecen, en realidad, el que debería prestar el servicio es el Estado, y el Estado no tiene posibilidades materiales de cumplir con esta demanda. Entonces, ¡guarda con la utilización del concepto de servicio público, porque en realidad, este concepto nos puede alejar bastante del objetivo deseado!

Pero digo más: a la hora de dar respuestas y al abordar el tema del GLP, hay muchos que

con sabias intenciones han pretendido resolver los problemas históricos de la Argentina. No está mal, pero a veces, algunos han perdido de vista que estas respuestas deben ser graduales y posibles. Cuando digo esto, lo hago para que no nos equivoquemos. Con un marco regulatorio como este, el servicio público, en realidad, no dice nada. Por eso, buscamos algo conciliador: la calificación como de interés público. Porque estamos diciendo que, en realidad, lo que queremos certificar; lo que queremos garantizar es que haya accesibilidad, y la calificación del servicio público nos aleja mucho del objetivo. Tenemos que lograr que esa accesibilidad sea para todos los usuarios, y lo tenemos que trabajar de la mano del precio y de la declaración de interés y orden público del servicio que se le da al marco regulatorio.

Me voy a referir ahora a las doctrinas jurídicas. ¿Por qué voy a hacer una referencia a la doctrina jurídica? Porque, en realidad, estoy un tanto aburrido de que efectivamente se analice la doctrina jurídica como si fuera una expresión sacrosanta. Tanto la doctrina jurídica como la norma positiva están creadas por hombres, con intencionalidades que no son neutras. Entonces, persiguen y promueven en el Estado cosas absolutamente distintas.

De hecho, cuando califica el servicio público, la doctrina jurídica no es conteste ni se pone de acuerdo. Por ejemplo, Marienhoff utiliza una definición sobre la base de la función, no del órgano. Dice que de acuerdo con la necesidad que vaya a satisfacer, si esta necesidad es elemental para el desarrollo del individuo, es servicio público. De la mano de deformaciones de esta doctrina podríamos llegar a calificar de servicio público, por ejemplo, cosas que sabemos que no lo son.

Después, está la definición del órgano, que dice que exclusivamente puede ser calificado de servicio público cuando el que lo presta es el Estado, en forma directa o porque lo ha concesionado.

Digo que hay una tercera teoría unificadora, que habla del servicio monopólico. No estamos en presencia de un servicio monopólico que presta el Estado. Tenemos más de 100 mil distribuidores y más de 200 fraccionadores. Tenemos que regular efectivamente para que esto no sea lo que es hoy, donde los abusos de posi-

ción dominante y la concentración monopólica han generado desastres. Esto es cierto y acá estamos cumpliendo con una cuestión que viene demorada desde distintas etapas, donde la última demora genera la búsqueda de consensos mínimos para legislar sobre un marco regulatorio que sirva.

Repito: el Estado no es titular del servicio. No es un servicio monopólico. Hay una actividad de usuarios importante. Entonces, tengámosla como referencia para ver cómo calificamos para que, efectivamente, la calificación nos arrime al objetivo. Yo digo que el camino no es “servicio público”; pero no lo digo sólo yo. Hay una gran parte de la doctrina –la doctrina mayoritaria– que dice lo mismo, porque no es monopólico y no lo presta el Estado.

La segunda arista, y no menor, fue el tema del precio: cómo nosotros garantizamos un precio de garrafa para el usuario de carácter domiciliario. Digo que lo primero que debemos entender es que el GLP es un *commodity*. Debemos monitorear su comportamiento en forma permanente. A la hora de tocar su valor, debemos ser muy cuidadosos, porque los autores de los diversos proyectos estuvieron encaminados hacia la fijación de un precio máximo y eligieron, por ejemplo, el desarrollo de fórmulas que partían de premisas mentirosas, como en el caso de la fórmula del gas natural y de muchas otras desarrolladas por nuestros genios.

Todo el mundo sabe que la fórmula del gas natural proviene de una premisa mentirosa, porque el precio de mercado del gas natural no es el que tiene en la actualidad. Si en el marco regulatorio armamos una fórmula sobre gas natural, cuando este empiece a acomodar su valor, vamos a tener que modificar la ley, porque esa fórmula, efectivamente, no responderá a la realidad sobre la que queremos legislar.

Hay otros que establecían la diferencia entre el precio de boca de pozo y el precio de refinaria. Pero el gas natural y el GLP no tienen nada que ver, porque se incorporan dos elementos, el propano y el butano, que implican todo un proceso industrial cuyo manejo de costos es bastante complicado.

Entonces, apareció la idea de establecer un precio de referencia –teniendo en cuenta que somos un país exportador– de paridad de exportación, lo que los técnicos llaman *export*

parity. ¿Qué es eso? Que efectivamente, si tenemos GLP, del cual el 60 por ciento se exporta y el 40 por ciento se destina al mercado interno, para no generar ninguna distorsión, lo lógico es que tengamos una paridad de exportación. Refiriéndonos a esa paridad de exportación, el Estado nacional, este Poder Ejecutivo ha dado muestras más que suficientes de que utiliza las herramientas que tiene a su alcance. De hecho, entre la paridad de exportación y el derecho de retención, que juega en favor del costo interno del gas licuado de petróleo, el Estado va a tener una herramienta que será la única que nos permita, a corto plazo, antes de fin de año, tener un precio de referencia como el que se busca.

Si utilizamos fórmulas y apotegmas –repito– mentirosos, nos va a pasar lo que nos pasó con el gasoil, cuando de la mano de los técnicos, nos decían que el subsidio era transitorio, y hoy, tenemos un parque automotor de diésel sobredimensionado y estamos comprando gasoil para abastecer el mercado interno.

A la hora de emplear mecanismos para manejar precios, tenemos que ser cuidadosos de que no se vuelvan en contra de nosotros, que sean mecanismos que permitan al Estado nacional y a la Secretaría, efectivamente, llegar a esto que se desea: un precio que, jugando con las retenciones, nos coloque muy cerca del ideal y un precio interno que va a demandar una negociación, que se puede llevar adelante sólo si se cuenta con herramientas. Y ésta es una muy buena herramienta.

A medida que avanzamos en el marco regulatorio, vemos algunas novedades muy importantes. Me refiero, por ejemplo, al artículo 6º, que habla del libre acceso, termina con la concentración monopólica. Este artículo es el que permitirá –el proyecto relacionado con ENARSA tiene sanción del Senado y espero que pronto sea sancionado en Diputados– empezar a romper con la estructura monopólica que actualmente tienen los grandes operadores del mercado. Por medio del artículo 6º, con su redacción tal cual está tipificada, el libre acceso a la competencia es una herramienta con la que vamos a poder interactuar.

El parque comunitario de garrafas permitirá a los pequeños fraccionadores, a los chiquitos que actualmente no tienen dónde fraccionar garrafas, competir en condiciones de igualdad, esto es, fraccionar y tener dónde envasar.

Además, me parece muy importante que entendamos lo que dijimos hace un instante. Había dos referencias muy concretas y puntuales y, en honor a la verdad, dos dudas: los servicios públicos y la redacción del artículo 46. Eran dos cuestiones a tener en cuenta que impedían lograr avances.

Efectivamente, la redacción originaria del artículo 46 implicaba una delegación de facultades. En ese sentido, se ha buscado una redacción a efectos de que el fondo fiduciario no conlleve ninguna delegación de facultades y, por otro lado, se le asignaron cuatro fuentes de recursos para que quede claramente establecido cómo se financiará.

La segunda cuestión que había sido observada fue la calificación de servicio público, aspecto sobre el cual pediría que se tenga cuidado. He conocido la intención de muchos de los legisladores cuando discutíamos este asunto en el seno de las comisiones. Comparto que la intención que se perseguía era lograr universalidad, accesibilidad y colocar un manto de equidad sobre una cuestión que, efectivamente, no es equitativa. Pero tengamos la grandeza de esperar los tiempos hasta fin de año, solicitados por el señor subsecretario del área, para alcanzar un precio de referencia tope y, al mismo tiempo, la humildad de corregir el marco regulatorio tantas veces como sea necesario en el supuesto de que no arrime la solución ideal.

Por lo demás, señor presidente, estimo que debemos avanzar en el tratamiento en general, y si es posible, también en el tratamiento en particular, para en forma definitiva dar a la sociedad usuaria de GLP el marco regulatorio que demanda desde hace tiempo. Reitero que es una demanda básicamente concentrada en las provincias del Noroeste Argentino, en donde hay enormes diferencias de costos. Por ejemplo, una familia tipo que gastaría 53,50 pesos si utilizara gas natural, debe destinar 238,90 en el caso de abastecerse con GLP.

Entiendo que esta diferencia es lo bastante significativa como para que la Cámara apure su marcha en la puesta del mecanismo en cuestión y lo corrija si eventualmente fuera necesario.

Por favor, avancemos porque hay sectores de la sociedad argentina que quieren velocidad en la implementación de un instrumento que les permita vivir dignamente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en primer lugar quiero decir que desde el bloque de la Unión Cívica Radical compartimos totalmente el tratamiento de una iniciativa que busque regular el mercado de distribución y fijar un régimen regulatorio para la industria y comercialización del gas licuado de petróleo.

Más allá de los fundamentos que se han esgrimido en general, con la regulación que se considerará en el día de la fecha, lo que se hará es llevar un poco de justicia a vastos sectores sociales que deben vivir con la paradoja de que, precisamente, por no tener recursos para acceder a las redes de gas natural, se encuentran cautivos de la adquisición de gas en garrafas de 10, 15 o 45 kilos, cuyo precio es siete veces superior al gas que proviene de redes.

Por lo tanto, la iniciativa de establecer un marco regulatorio para el gas licuado de petróleo debió haber sido abordada por el Congreso hace mucho tiempo.

Por eso, en general, acompañaremos la iniciativa que, por otra parte, como bien dijo el señor miembro informante del bloque de la mayoría, fue consensuada mediante diferentes proyectos, aunque diría que, centralmente, la sanción que se lograría luego de los tratamientos en general y en particular responde en un 80 por ciento a la estructura de una iniciativa presentada oportunamente por el bloque de la Unión Cívica Radical. De ahí que no podemos menos que acompañarla con nuestro voto. Se trataba de un proyecto presentado oportunamente por los señores senadores Moro, Falcó, Maestro y Agúndez. Dichos senadores –en representación del Bloque de la Unión Cívica Radical– fueron los que elevaron la iniciativa que entiendo sirvió de guía para el marco regulatorio que estamos considerando.

Efectuaré algunas observaciones que me parecen centrales en este tratamiento en general. Hemos pedido la postergación del tratamiento en particular, a los efectos de pulir y corregir algunas redacciones vinculadas con los aspectos que desarrollaremos.

En primer lugar, insistimos en la redacción del artículo 5º del proyecto de los senadores antes mencionados. Dicho artículo habla de la tipificación del servicio público y establece que a los

efectos de la presente ley se declara servicio público a la industria del gas licuado de petróleo en todas sus etapas. En este punto, consideramos que es central la definición de “servicio público”.

Tal como ha dicho el miembro informante por la mayoría, es cierto que existen diversos conceptos con relación a lo que es un servicio público. En ese sentido, leeré uno de los conceptos que, de acuerdo con lo que ha planteado el miembro informante, pienso que engloba a todos los aspectos que se quieren tener en cuenta. Se entiende por “servicio público” a toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes. Es decir que la tipificación de “servicio público” es lo que da sustento a la aprobación del marco regulatorio, y lo que obliga al Estado —en este caso, el Congreso de la Nación— a intervenir en esta actividad. Justamente, es el Estado el que debe garantizar ese servicio a través de su regulación, provisión y fiscalización. Además, debe hacer esto por ser “indispensable para la realización y el desenvolvimiento de la interdependencia social”, tal como dispone este concepto que es muy amplio y que involucra todos los aspectos del proyecto de ley que estamos considerando.

Y el concepto dice también “y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza del gobierno”. Esto tiene que ver también con lo planteado con relación al tratamiento diferencial en el IVA y con la creación del fondo fiduciario, que también es otra de las incógnitas que traemos a este recinto. Justamente, estas son las cuestiones que a nuestro entender motivan la dilación del tratamiento en particular.

De ahí que la definición de “servicio público” es central. Como decimos, es la fuente y la esencia que determina la obligación del Estado de regular este servicio que no está regulado. Además, se da la paradoja de que incumbe a los sectores más carecientes, los que tienen que pagar mucho más cara la provisión del gas.

Otro tema que nos parece que motiva que demos hoy el tratamiento en general y posteriorguemos la consideración en particular para la próxima sesión es el vinculado con el artículo 8°. Recién hablábamos con el miembro informante por la mayoría respecto de la autoridad

de aplicación. Está bien que dicha autoridad sea la Secretaría de Energía, pero considero que no es correcto que en un proyecto de esta envergadura demos a dicha Secretaría la atribución de fiscalizar al Enargas, pues este es actualmente el ente de fiscalización bajo cuya órbita está la provisión del gas natural.

Por lo tanto, creo que en el artículo 8° tendría que quedar bien definida la competencia como autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía y de fiscalización del Enargas, y no que exista la posibilidad a futuro de que la fiscalización la realice la Secretaría de Energía.

Considero que este Congreso es el que debe definir concretamente quién es la autoridad de aplicación y quién tendrá a su cargo la facultades de control y fiscalización. Y para eso, ya hay un órgano creado que es el Enargas que, como decimos, ya es competente en materia de regulación del gas por redes, es decir, del gas natural. Tendría que agregarse, ahora, toda la normativa que estamos por aprobar en esta sesión, relacionada con la regulación del gas licuado de petróleo, es decir, del gas en garrafa. Esta es otra de las observaciones centrales.

La tercera observación se refiere a la creación del fondo fiduciario como se está planteando. Si bien el miembro informante de la mayoría ha planteado parcialmente su vocación de corregir un tema central relacionado con una extensa delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, este tema tiene dos efectos; no sólo se refiere a la delegación de facultades sino que el artículo 46 permite que este fondo fiduciario pueda cumplirse o no. En efecto, se trata de un fondo que se va a nutrir con las fuentes de financiamiento que disponga el Poder Ejecutivo.

Entiendo que así como el fondo va a tener especificidad en la aplicación de los recursos que lo van a nutrir, también debería ser específico en cuanto a cuáles van a ser los recursos que se van a aplicar para su creación. En ese sentido, deberían especificarse las previsiones presupuestarias que anualmente disponga el Poder Ejecutivo y que apruebe el Congreso de la Nación. Podría preverse también la aplicación de algún impuesto...

Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Morales. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Quisiera hacer una aclaración concreta. No entré a enumerar y detallar la redacción del artículo 46 porque entendía que debería abordarse esa cuestión en la discusión en particular. Sí dije que, de acuerdo con la observación formulada por la Unión Cívica Radical, entendía que en la redacción originaria había una delegación de facultades. En ese sentido hablé de cuatro fuentes de financiamiento y a los efectos de que quede particularmente claro que no existe delegación, voy a reiterar a continuación la redacción propuesta por la Comisión para que ese fantasma abandone el recinto. Conforme el inciso *a*, la totalidad de los recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la presente ley van al fondo; según el inciso *b*, los fondos que por la ley de presupuesto se asignen; conforme el inciso *c*, los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales o internacionales de la mano del decreto 180; y finalmente tenemos el inciso *d* que se refiere a los aportes específicos que las autoridades de aplicación convengan a los operadores de la actividad.

Esto significa que estas fuentes de recursos con los cuales se crea el fondo están específicamente estatuidas en el artículo 46 del proyecto, en cuatro incisos. Esto viene a clarificar lo que –reconozco– en la redacción desnuda originaria arrojaba algún tipo de dudas.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: quiero plantear otra observación con relación al fondo fiduciario. Creo que una redacción de ese tipo puede significar una mejora; no obstante creo que se debe analizar cómo juegan en esta cuestión los decretos 180 y 181, que todavía no han sido ratificados por el Congreso.

Pero también hay una cuestión de mayor importancia, y es cómo se administra ese fondo; quiénes van a ser los que administran el fondo fiduciario. No se dice aquí en cabeza de quién estará ese manejo y cuál será el mecanismo a aplicar. Y señalo esta cuestión porque existen muchos fondos fiduciarios creados y algunos cumplen sus objetivos mientras que otros no.

Existen fondos que han pasado a convertirse en presupuestos y administraciones paralelas al control del Estado. Este es un tema que hemos planteado para el plan anual de auditoría de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración a fin de que se controlen esos fondos.

Existen también fondos fiduciarios previstos y creados pero que no se han ejecutado. Ejemplo de esto y relacionado con el gas en garrafa es el Fondo de Subsidios para Gas en Garrafa para la Patagonia y la Puna Argentina, que tiene depositados setenta y cinco millones de pesos en el Banco de la Nación Argentina. Cuando se creó ese fondo se dijo cuál era la autoridad de aplicación y la entidad que tendría la guarda de los fondos: el Banco de la Nación. Reitero que tienen guardados setenta y cinco millones de pesos hace varios años. Este fondo ha sido creado por el presupuesto; pero la única provincia de la Patagonia que lo está ejecutando es Santa Cruz. ¿Por qué? Pues es la única que pone la plata.

Ello se debe al mecanismo de asignación del subsidio que establece dicho fondo fiduciario, que es sumamente perverso, dado que el pequeño vendedor de gas en garrafa, que es un pequeño comerciante, no puede esperar el tiempo establecido por la normativa para obtener el reintegro respectivo.

Es que la reglamentación de la asignación de este beneficio le dice al almacenero que venda el gas en garrafa, sin perjuicio de que el importe del subsidio le será reintegrado en sesenta días, luego de un trámite ciertamente burocrático y engorroso. Lógicamente, el pequeño comerciante no puede esperar ese plazo, ni soportar cargar dicho importe a su propio bolsillo.

Entonces, ¿qué hace el gobierno de Santa Cruz al respecto? Simplemente, pone la plata. Es decir, atiende el subsidio inmediatamente y espera los sesenta días, hasta obtener la reposición.

Ahora bien, de todos esos fondos, solamente se han ejecutado 6.000.000 de pesos; el resto de las provincias de la Patagonia –se ha mencionado también a los departamentos de Malargüe, en Mendoza, a Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y a regiones de la puna jujeña, catamarqueña y salteña– todavía no ha podido implementar este beneficio,

porque como hay que consultar para ello al pequeño comerciante que vende el gas en garrafa, no se ha podido llegar a su establecimiento.

No queremos crear un fondo fiduciario que constituya una extensa delegación de facultades y que no tenga precisiones sobre cuál es su autoridad de aplicación, cómo se administra o cuál será su principio de ejecución, porque en tal caso crearíamos una normativa que sería un engaño y no serviría, en definitiva, para el objetivo que se pretende. O sea, que se pueda subsidiar el precio del gas en garrafa. Y al respecto es fundamental la participación del Estado para garantizarlo en la medida que estamos ante un servicio público.

El concepto del servicio público tiene que ver con el marco regulatorio y le da sustento a éste y a la creación del fondo fiduciario para que el Estado llegue a los sectores más carenciados, a fin de ayudarlos a que puedan obtener el gas en garrafa.

También se plantea el concepto de acceso a la red, cuando existen familias argentinas instaladas en lugares donde pasa un gasoducto y, sin embargo, no pueden acceder a ella pues viven en situaciones de indigencia, o sea, con sus necesidades básicas insatisfechas, razón por la cual ni siquiera pueden engancharse a una red de gas natural.

Entonces, el objeto nos parece bien, pero todo apunta a que estamos ante un servicio público: el marco regulatorio, la definición del fondo fiduciario, el establecimiento por parte del dictamen de la Comisión de Energía de una alícuota diferencial del IVA para toda la cadena de producción y distribución del 10,5 por ciento, en lugar del 21 por ciento, etcétera.

Por eso, nosotros hacemos la observación central de que queremos atenernos a la redacción originaria del artículo 15 del proyecto.

Por otra parte, cuando avancé sobre el artículo 46 lo hice con el objeto de fundamentar nuestro pedido de tratar hoy en general esta norma, dejando su tratamiento en particular para la próxima sesión, puesto que considero que si mejoramos un poco ciertos aspectos, con el consenso de todas las bancadas podremos sancionar una buena ley.

Creo que aquí se han aportado elementos importantes. Me refiero al tema de los parámetros

para la fijación de la tarifa –que si bien se toma de algunos proyectos originales, es un aspecto central que justamente marca la presencia del Estado en esta regulación–; a los precios de referencia del capítulo IX, artículo 34 –que plantea el precio de referencia del gas licuado de petróleo para uso domiciliario–; al tema de las restricciones, cuando se establece que una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno la exportación será libre –algo que tiene que ver con el problema de provisión de gas natural que hemos tenido con Chile y con otros países vecinos–; y a la restricción de la importación en ciertos casos de países con estos servicios subsidiados.

Es decir, nos parece que en general el marco regulatorio que estamos tratando aporta elementos interesantes en cuanto a la determinación o fijación de las tarifas y al establecimiento de una ayuda por parte del Estado, pero creemos que sería bueno mejorar la redacción. Por ello, insistimos en algo que es central: tiene que ser un servicio público. Reiteramos esto porque, justamente, eso le dará la calidad de que deba ser un servicio regulado, asegurado y fiscalizado por el Estado.

El segundo tema central es que en la redacción se defina claramente desde el Congreso quiénes serán la autoridad de aplicación y el órgano de fiscalización. Compartimos el criterio de que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía, pero consideramos que el órgano de fiscalización debería ser el Enargas, que tiene posibilidades de ejercer esta función y dispone del personal técnico para llevar a cabo esta tarea. El hecho de que el Enargas haya funcionado bien o mal durante la última década es un problema de política de los entes reguladores. A mí me parece que cuando desde el Poder Ejecutivo se aplica una buena política y se realiza un control en serio, el órgano competente en materia de fiscalización tendría que ser el Enargas.

Estas son algunas de las observaciones que tenemos que formular. Este es un dictamen que tiene centralmente muchas de las iniciativas presentadas por el bloque de la Unión Cívica Radical, razón por la cual vamos a acompañar en general la sanción de esta iniciativa, con la idea de avanzar en su tratamiento en particular durante la próxima semana.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – En el tratamiento en general del Orden del Día N° 619 es fundamental la definición de servicio público o no. Creo que ese tema es un aspecto que no hace al tratamiento en particular de este proyecto, sino que tiene que ver con la definición acerca de si el marco regulatorio va a regular de una o de otra manera. Para nosotros, esta es la esencia de la cuestión que estamos discutiendo porque vemos con agrado la creación de un marco regulatorio y que el GLP llegue al recinto de la Cámara de Senadores con la base de los proyectos presentados por distintos senadores.

Partimos de la realidad que señaló el señor miembro informante acerca de cuáles son los sectores castigados por el aumento disparatado de los precios del gas en garrafa. Sabemos que son los sectores más humildes de todo el país: trece millones de personas que no poseen gas natural, diez millones de las cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esos aumentos disparatados provocaron que, por ejemplo, la garrafa de gas de diez kilos pasara de un precio de entre 8 y 9,50 pesos a 22 y 25 pesos, según la zona del país de que se trate. Y eso se produjo entre los años 2001 y 2003: cuando durante ese período los precios minoristas subieron nada más que un 44,5 por ciento, este artículo subió un 180 por ciento. Entonces, es evidente que estamos ante una situación de terrible falta de equidad para los sectores más postergados de la sociedad que tienen que pagar estos aumentos que no se condicen, en absoluto, con ningún otro precio del mercado interno, menos aún con el precio del gas natural.

Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El miembro informante también reconoció que existe un abuso de posición dominante; eso fue lo que dijo en su discurso. Y existe abuso de posición dominante cuando hay mercados oligopólicos. Es cierto que se trata de un mercado donde hay 70 empresas, 200 fraccionadores y 100.000 distribuidores, pero es verdad también que el 78 por ciento del mercado está absolutamente concentrado en muy pocas empresas, que son las petroleras. Esta es la realidad de este mercado. Por eso nos parece esencial que se junten algunas cosas que parecen sueltas. Efectivamente, por parte del Poder Ejecutivo nacio-

nal existió el compromiso de enviar un proyecto que establezca el marco regulatorio de los servicios públicos concesionados. En términos generales compartimos el proyecto que entró en la Cámara de Diputados de la Nación, dado que nos parece altamente positivo que el marco regulatorio de los servicios públicos concesionados se apruebe en el Congreso de la Nación.

El proyecto del Poder Ejecutivo que establece el marco regulatorio actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, define con claridad las características del servicio público, los entes, las audiencias públicas, pero le falta definir –esto lo deberá hacer el Congreso– el listado de los servicios públicos a los cuales se refiere ese marco regulatorio. Hay algunos que obviamente ya están definidos en función de las distintas privatizaciones que se hicieron en el país. Por ejemplo, nadie debate si el gas natural es un servicio público, porque hay una ley que así lo define y un ente de control. No hay ningún debate acerca de si el agua es un servicio público o no. Sí hay un debate en cuanto al petróleo. Yo considero que constituye una de las actividades que debería estar considerada como servicio público e incluida en el listado que va a tener que definir el Congreso sobre la base del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Personalmente entiendo que el GLP debería estar incluido dentro del listado de los servicios públicos a regular. En tal sentido he presentado sendos proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, el debate de si es un servicio público o no es algo esencial. Por otra parte, a la sociedad no le estamos dando ninguna buena noticia si le hablamos de la paridad de exportación y encima lo hacemos en inglés. La buena noticia sería decirle a la sociedad que el precio de la garrafa de 10 kilos, que es la que consumen los sectores más desposeídos, más humildes del país, en vez de 22 o 25 pesos va a costar sensiblemente menos y que además dicho valor va a estar controlado por un ente de control, por audiencias públicas, y no sujeto a una paridad internacional. Entonces, la gran diferencia conceptual consiste en determinar si lo consideramos un servicio público o no dentro del marco regulatorio que estamos definiendo.

Cuando vino el secretario de Energía a una reunión a la cual fuimos invitados como autores

de proyectos relacionados con el tema, en su momento le planteamos la necesidad de declararlo servicio público, pero el secretario de Energía ni siquiera aceptó la declaración de interés del servicio público del GLP, porque planteó que con la garrafa social se daba la respuesta que se pretendía. Es evidente que la garrafa social –y así lo dijimos en esa reunión– no era la respuesta adecuada e iba a fracasar, porque no podía llegar a todos los habitantes del país que la necesitaran. En consecuencia, esa fue una respuesta absolutamente insuficiente en algunos casos y un total fracaso en la mayoría de los lugares del interior del país. Por eso necesitamos esta ley. Por eso necesitamos un marco regulatorio. Pero necesitaríamos que este marco regulatorio defina como cuestión esencial al GLP como servicio público. ¿Por qué decimos que debe ser un servicio público? Yendo a la doctrina, según Bidart Campos –y acá le hacemos un homenaje–: “El acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio. Y es el Estado el que debe lograrlo con la participación de la sociedad”. Bidart Campos, *Manual de la Constitución reformada*.

Considerando la Constitución reformada es fundamental siempre el artículo 42, cuando hablamos de los servicios públicos y de los usuarios. Por eso nos dice Agustín Gordillo que “es el monopolio o ausencia de libre competencia lo que determina el régimen jurídico especial, y en consecuencia centramos la noción de servicio público en esta idea”. Y sigue diciendo: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia...”. Lo dice citando a la Constitución Nacional: “Cuando no se ha podido evitar el monopolio o se lo ha creado expresamente, la necesidad de regulación fuerte e intensa de un régimen de derecho público es indispensable para que el monopolio no perjudique los derechos e intereses que enumera el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: por eso nos hubiera gustado que esta declaración de servicios públicos se hiciera por el Senado, como ya se ha hecho por la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene un dictamen de las comisiones de Energía y de Defensa del Usuario que, en el artículo 7º, califica concretamente al GLP como servicio público y consecuentemente con eso, plantea un marco regulatorio donde habla de entes reguladores...

Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, el señor senador Fernández le pide una interrupción.

Sr. Giustiniani. – Cómo no, señor senador.

Sr. Fernández. – Señor presidente: es al solo efecto de solicitar que proceda al cierre de la lista de oradores, y si es posible, que luego se prosiga con la votación.

Sr. Presidente (Guinle). – Es una moción de orden.

¿Quién más se va a incorporar a la lista de oradores, antes de cerrarla?

Sr. Salvatori. – Solicito la inserción de mi discurso en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Guinle). – Así se hará, señor senador.

Si hay asentimiento procederemos a cerrar la lista de oradores.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación leeré cómo quedó integrada la lista de oradores: senadora Mastandrea, senador Rossi, senador Jaque, senador Capitanich, senador Ríos, senador Prades, senador Falcó y senador Guinle.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estaba diciendo que es fundamental la definición de servicio público, porque estamos en presencia de un mercado monopólico. Había dicho que el 78 por ciento de la venta de gas licuado está en manos de las empresas Repsol YPF, Grupo Mega y Grupo PC. El Grupo Mega es un *joint venture* conformado por Petrobras y Repsol YPF, que destina casi toda su producción al mercado brasileño.

También es importante tener en cuenta un informe elaborado por el Instituto Argentino de Energía que señaló que a la concentración verificada en las diferentes etapas de la actividad

se suman las deficiencias en las inspecciones por parte de los organismos públicos. Este documento dice que las empresas no cuentan con datos estadísticos sobre sus precios y la Secretaría de Energía no tiene información específica sobre la estructura del mercado.

Por eso estamos de acuerdo en que cuando hacemos referencia al servicio público no es lo mismo hablar de precio que de tarifa; que no es lo mismo que controle la Secretaría de Energía que el Enargas.

Por lo tanto, cada una de estas definiciones –que en la discusión en particular vamos a seguir planteando– hacen a una cuestión madre de lo que es el servicio público.

En cuanto a la rentabilidad, en un estudio hecho por la Defensoría del Pueblo de la Nación, se determinó que hubo una transferencia directa de los precios a los consumidores que generó un beneficio empresario de más de 4.600 millones de dólares en los últimos seis años.

En este sentido, la ley 23.696 habla de rentabilidad razonable y de tarifas justas y razonables, porque la rentabilidad excesiva de una empresa de servicios públicos implica una exacción directa al bolsillo de la gente y también, en la mayoría de los casos, un encarecimiento de la producción. Esto está verificado en la historia de las privatizaciones en la República Argentina, donde hubo una violación permanente a la ley 23.696.

Si se tiene una fábrica de zapatillas, el fabricante puede ponerle el precio que quiera a su producto, porque el precio y la calidad en el mercado harán que la gente elija lo que el fabricante vende o no, ya que hay varias marcas diferentes.

Ahora bien, en el caso del gas, la gente no tiene otra opción que comprar la garrafa, porque no posee la cañería de gas natural y, en consecuencia, debe adquirir el producto al precio que se lo venden. Es decir que se trata de un monopolio. Como hemos explicado, no actúa libremente y existe abuso de posición dominante.

Por lo tanto, es central que este régimen de regulación del GLP comience diciendo que se trata de un servicio público.

En consecuencia, por las razones expuestas, si no hay un cambio en este concepto, lamentablemente no podremos acompañar en general al proyecto.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. – Señor presidente: creo que desde la sanción de la ley 24.706, que estableció la obligatoriedad de fijar el marco regulatorio del gas licuado de petróleo, han pasado doce años, por lo cual el Senado tenía la obligación moral de abordar esta temática.

En este momento estamos cumpliendo con algo más que con la sanción de una ley que fija un marco regulatorio, porque esta norma está directamente relacionada con la pobreza y el hambre.

En nombre de mi bloque, quiero dejar claramente sentado que el gas licuado de petróleo para la región del NEA, donde no existe otra alternativa más que la garrafa, se transformó en un tema básico de supervivencia.

Asimismo, quiero señalar que estamos viviendo un momento histórico y que apoyar el marco regulatorio del gas es para este bloque un tema de suma importancia.

El gas licuado de petróleo en el NEA no se usa para calefaccionar sino principalmente para refrigerar. En efecto, si en las zonas del Impenetrable, donde hay que comprar el gas a más de cuarenta pesos los diez kilos, la gente no logra comprar esa garrafa no puede almacenar los alimentos y, por ende, tampoco puede comer. Es importante que señalemos esto porque es histórico estar abordando el tema del marco regulatorio del gas licuado de petróleo en este momento, ya que tiene que ver con una parte de la población argentina que está casi siempre discriminada.

El Norte ha sido discriminado en los casos de la aftosa, la ganadería y las sequías. Si no se sabe a ciencia cierta, quiero decir que actualmente se está trasladando agua en vagones del ferrocarril porque la población del Chaco no tiene agua para tomar.

El tema del gas licuado de petróleo es una asimetría más que se suma a las tantas existentes en el Norte. Por eso me parece importante rescatar el hecho de que debemos tener consenso para aprobar proyectos, algo que es fundamental. De nada sirve tener consensos y no tener proyectos. Si hoy podemos abordar el tratamiento de este proyecto de ley y dar un paso adelante aprobándolo en general, dándonos un tiempo corto para eliminar las disidencias y así

llegar a un consenso sobre aquellos puntos sobre los que hoy no nos podríamos poner de acuerdo, estaríamos dando respuesta a un sector de la población argentina que en este momento pasa hambre.

Entonces, quiero que reflexionemos juntos en el sentido de que el marco regulatorio de gas licuado de petróleo tiene que ver con el sector industrial. Así se demostró en la última reunión que hicimos los legisladores del NEA y NOA los industriales de Tucumán, haciéndonos saber la necesidad de tomar el tema del gas –ya sea natural, comprimido o licuado de petróleo– en toda su dimensión a efectos de apoyar a ese sector, que es básico.

El sector industrial es uno de los sujetos activos de esta norma, pero creo que su sujeto pasivo es el usuario; es el pobre hombre que en este momento está decidiendo si compra gas, si compra un libro, si da de comer a sus hijos o si, de lo contrario, queda excluido totalmente del sistema.

Por eso me parece importante que asumamos la responsabilidad que nos toca por haber sido demorada doce años la regulación de esta ley y tomemos con total seriedad que estamos dando un paso sumamente importante para los hermanos de la República Argentina que menos tienen.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente; he pedido el uso de la palabra a efectos de adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto en tratamiento.

Estamos convencidos de que la crisis energética por la que atravesó la Argentina en el corriente año puso de manifiesto la enorme inequidad que se había generado a lo largo del país y, fundamentalmente, en las zonas más necesitadas.

Quiero decir que sistemáticamente se habla de algunas zonas del Norte como las más perjudicadas por los inconvenientes en el suministro de gas licuado de petróleo; pero yo pertenezco a una provincia mediterránea como Córdoba en cuyo interior la gente cocina, calefacciona, refrigera y vive fundamentalmente con la garrafa de diez kilos a la que todos hacemos alusión.

Se sumó a la crisis energética de este año lo que todos conocemos como la salida de la

convertibilidad. En efecto, si en un producto se notó palmariamente el reajuste de lo que fue la relación uno a uno del valor del precio peso-dólar ha sido en el caso del gas licuado de petróleo. En este sentido, no se quedaron cortos, señor presidente. No multiplicaron el valor por tres. En Córdoba lo multiplicaron por cuatro y, según escuché a la senadora Mastandrea, en su provincia lo multiplicaron por cinco o por seis. Esto, como es obvio, repercutió en forma directa e inmediata en los bolsillos de las familias más humildes.

A todo el trastorno de tener que suministrar el gas en garrafa, trasladándolo enormes distancias, se suma entonces el costo inaccesible, fuera de todo cálculo y expectativa.

Tal vez estos elementos, más los reclamos sociales que levantaron la garrafa social como una bandera, estaban demostrando palmariamente que en la Argentina se había instalado un grave problema.

También es importante destacar las iniciativas presentadas, que hacen que hoy estemos tratando este proyecto de ley. Obviamente, me hubiera gustado que, en su artículo 5º, se lo identificara como un servicio público. El mencionado artículo del proyecto en consideración lo describe como de interés público. De cualquier modo, en el contexto general de la ley se avanza sobre temas importantes, como la desgravación y disminución del IVA, la creación de un fondo fiduciario que garantiza a las autoridades pertinentes la posibilidad de extender el gas natural y, por supuesto, ir supliendo lentamente la carencia de este servicio esencial. También avanza sobre algo que quiero destacar –quizás porque, en mi vida, me tocó alguna responsabilidad en cuanto a la seguridad y la defensa civil–, que es el peligro. Muchas veces, por el pésimo estado de mantenimiento de las garrafas, se colocan bombas de tiempo en los hogares de los cordobeses y de los argentinos más humildes.

Este articulado también avanza sobre la obligación de registrar los envases de las garrafas y de hacer un seguimiento de su conservación, estado y mantenimiento, así como también sobre la responsabilidad de quienes son, precisamente, los matriculados o los poseedores responsables de cada uno de estos envases. Sabemos, año tras año, del enorme costo social por accidentes hogareños que se registran por

el mal mantenimiento de las garrafas. Por eso, esto también me parece un avance.

Más allá de que comparto algunas observaciones formuladas principalmente por el representante del bloque del radicalismo en cuanto a lo que expresan los artículos 46 y 5º, creo que el Estado ha tomado como propio, a través de este proyecto de ley, el objetivo de hacerse cargo de un enorme flagelo social.

A partir de la sanción de este proyecto de ley, el gas licuado de petróleo también será un problema social, declarado de interés público por el Estado, que tendrá responsabilidad elemental en la regulación de su precio.

Quisiera destacar la obligatoriedad, que le exige el Estado a las empresas que comercializan el producto, en cuanto a garantizar el servicio dentro del país previamente a la exportación.

En función de estas razones y motivaciones, vamos a acompañar el proyecto. Por lo tanto, adelanto el voto favorable.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el senador Jaque.

Sr. Jaque. – Señor presidente: creo que la importancia que reviste el tema en análisis la da el hecho de que el dictamen que estamos considerando es el producto de más de siete iniciativas presentadas por diferentes senadores que componen este cuerpo.

Lo que pretendemos, como objetivo fundamental de este proyecto de ley, no es únicamente dar cumplimiento a lo que establecía la ley 24.076, que reguló el transporte y distribución del gas natural, sino que tiende a otros objetivos que no son menores. Por ejemplo, el hecho de encontrar una solución a los antecedentes de posición dominante que existe en el sector de la producción, dar mayor claridad a los problemas de control en la seguridad de envases e identificación, que es parte de un problema que se presenta en el área de fraccionamiento y distribución, y una cuestión no menor, ya mencionada esta noche, que, en el caso específico del precio de las garrafas, implica buscar una mayor transparencia y evitar obviamente los precios abusivos que, de una u otra manera, afectan a distintos lugares de nuestro país.

En este caso, como bien se ha mencionado aquí, se habla de que el mercado de GLP cubre

aproximadamente a unos 4.500.000 usuarios, los más pobres del país, distribuidos especialmente en el NOA y en el NEA y también en el resto de las provincias, sobre todo en los lugares más alejados de las concentraciones urbanas.

Se trata de un sector que tiene diferentes formas de abastecerse de ese elemento. Al respecto, es importante que en el análisis de la cuestión se tenga en cuenta la diferencia que subsiste entre el gas natural y el GLP, que es el fluido que nos ocupa en el día de la fecha. Esa diferencia es importante evaluarla a la luz de otros temas en discusión como son, justamente, la consideración de si se trata de un tema de interés público o de un servicio público.

El mercado del gas natural se encuentra regulado. Es un elemento gaseoso que, fundamentalmente, se distribuye a domicilio por gasoductos y redes y cuyo consumo medio en el país llega, aproximadamente, a los mil metros cúbicos al año, lo cual implicaría un gasto aproximado de 300 o 400 pesos anuales.

En cambio, en el caso del GLP, se trata de un elemento en estado líquido, que se distribuye por camiones o envases y se encuentra desregulado hasta tanto no se sancione la ley pertinente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el consumo medio actual del país es de, aproximadamente, 200 kilos –unas veinte garrafas–, lo que daría un promedio aproximado de gasto de 500 pesos anuales. Ahora bien, si uno quisiera equiparar el consumo de GLP a los mil metros cúbicos del gas por red, el gasto ascendería a unos dos mil pesos anuales.

¿Qué otras cosas son necesarias tener en cuenta?

En el proyecto de ley en consideración los objetivos a alcanzar son amplios e importantes. No sólo se busca proteger de una manera adecuada los derechos de los consumidores sino también promover la competitividad de la oferta y la demanda para alentar la expansión del servicio y, consecuentemente, que más personas accedan a él.

En la discusión que se efectúa pareciera ser que solamente se hace referencia a quienes tienen la posibilidad de acceder al servicio, aunque hay muchos otros argentinos que ni siquiera llegan a él por diversas razones.

Por lo tanto, el generar ese acceso no sólo implica contar con un sistema regulado sino tam-

bién con precios justos y razonables y que, de ninguna manera, superen los precios de paridad de exportación.

Por otro lado, es importante tener presente que aun cuando se pueda regular la actividad y establecer una metodología para la determinación del precio, siempre existirán sectores pobres que ni con un precio de esta magnitud podrán acceder al servicio.

En consecuencia, es importante resaltar que la posibilidad de crear un fondo compensatorio para lograr un mayor acceso al gas es por demás importante. Caso contrario, no permitiríamos la igualdad de la accesibilidad al servicio.

En cuanto a la discusión acerca de si debe ser declarado servicio público o de interés público, la situación no pasa por una cuestión de principios sino que hay que analizarla desde el punto de vista de la accesibilidad o de la posibilidad práctica de aplicar el concepto de servicio público. Declamar en una ley –sólo por una cuestión de principios– que el servicio es público y que luego en la práctica eso no se pueda realmente aplicar, es mucho peor que asumir que estamos en presencia de una actividad que debe declararse por ley como de interés público.

Hay que tener presente que estamos hablando de un sistema que tiene sustitutos, ya que a veces parece que nos referimos a un elemento que por no tener otro tipo de reemplazos lo consideraríamos un servicio público.

Por lo tanto, sabiamente el proyecto que estamos analizando lo declara de interés público, en el entendimiento de que esto conduce a la necesidad de regularlo en cuanto a la actividad en sí misma. De esta manera se evita llegar a una mera declaración de deseos, es decir, el establecer una categoría –como podría ser la de servicio público– que en definitiva no permita la accesibilidad, aun con esa característica, no sólo a los sectores más pobres sino también a aquellos que se encuentran más alejados de los centros urbanos, que si bien en nuestro país pareciera ser que a la hora de ver las cantidades no fueran muchos, también necesitan que los contemplemos en este tipo de regulación.

Por otro lado, a la hora de determinar el precio de la garrafa es importante asegurar la publicidad, sobre todo en aquellos tipos de envases que son más comunes y característicos.

Es cierto que existen diferencias. En mi caso, hubiera creído más conveniente una forma polinómica –quizás por mi formación personal–. Sin embargo, creo que tampoco es bueno caer en la mera discusión respecto de si fórmula polinómica sí o fórmula polinómica no. Lo importante es que establezcamos un criterio claro y que permita tener en forma transparente el precio de referencia. Al respecto, es importante asegurar la correcta publicación, en la forma más masiva posible, para evitar los abusos, y que haya un sistema de muy buen control para evitar las situaciones dominantes que a veces han estado a la hora del día en esta actividad que estamos pretendiendo regular.

Es cierto que cuando se habla de paridad de exportación se hace referencia a un concepto económico que trata de determinar un mecanismo para la fijación de un precio en función del mercado internacional, mucho más amplio de lo que puede ser el país.

No quisiera entrar en esta discusión, a pesar de que, insisto, ello hubiera sido mucho más sano. Creo que tal como se establece en el dictamen bajo análisis implica una mejora y esta es una de las razones por las cuales creo conveniente que aprobemos...

Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una interrupción el senador Fernández. ¿Se la concede, senador?

Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Una de las preocupaciones que existían en la Cámara de Diputados en la noche de ayer se refería a que la redacción originaria del dictamen de comisión no era lo suficientemente clara sobre el precio de referencia.

Dado que esta cuestión se encuentra en sintonía con lo que informa el señor senador, entiendo pertinente y atinado transmitirle que, a partir del consenso y la sugerencia de algunos diputados integrantes de la Comisión de Energía y con los senadores que trabajaron hoy en el dictamen de comisión, se elaboró una redacción alternativa que seguramente será puesta a consideración en el momento oportuno al considerarse en particular el artículo 34.

Dicha redacción se encuentra en línea con lo que usted acaba de informar, por lo que me gustaría leerla a efectos de que podamos acercarnos en una cuestión que parece distante pero no lo está tanto.

Dice el artículo 34 en la formulación que vamos a proponer, que el precio de referencia al que se refiere la norma será calculado propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual del GLP a granel a la salida de la planta productora, calculado sobre los principios determinados en el inciso *b* del artículo 7º, y de los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.

Este artículo 34 tiene luego un copete final que dice que si se verifica en el mercado un apartamiento significativo de los precios de referencia —que son de carácter público— se aplicarán las sanciones del artículo 42. El hecho de establecer el precio de referencia con el valor de exportación —que tenía algo que ver con lo expresado por el senador por Santa Fe— se debe a que efectivamente la brecha en la cual se fija ese precio no puede ser antojadiza; de lo contrario, nadie puede indicar que efectivamente vamos a tener abastecimiento.

Por eso el marco regulatorio es efectivamente sabio, ya que determina el abastecimiento del mercado interno previo a la exportación con una solicitud previa de treinta días que deben hacer los futuros exportadores.

Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Jaque.

Sr. Jaque. — Señor presidente: justamente quería hacer referencia a esa cuestión. Si bien uno podía caer en esa discusión, entendía que sabiamente estábamos dando una solución que debía evitar ese debate acerca de fórmulas polinómicas. Y a pesar de que uno podía encasillarse en una posición, entiendo que es saludable la solución que se propone para el artículo 34.

La otra cuestión a resaltar es que resulta saludable que la alícuota del IVA para toda la cadena del GLP se disminuya en un cincuenta por ciento, estableciéndola en el 10,5 por ciento, dado que ello también ayuda a poder disminuir el valor de la garrafa, que es lo que perseguimos como

objetivo de esta norma para garantizar así una mayor accesibilidad para más argentinos. Se trata de un beneficio para aquellos sectores más castigados y a los cuales estamos intentando brindarles una solución.

Por estos motivos anticipo mi voto favorable, entendiendo que se ha realizado una tarea importante en la redacción final de este dictamen. De esta forma estamos permitiendo que el país cuente con una normativa que asegure una mayor regulación en una actividad que, obviamente, hoy más que nunca requiere una intervención inteligente del Estado para evitar que existan precios abusivos y, fundamentalmente, situaciones de control dominante.

Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: oportunamente he presentado un proyecto con el objeto de tratar en forma específica la realidad del abastecimiento del gas licuado de petróleo en mi provincia, estableciendo la necesidad de promover y propiciar un subsidio que permita equiparar el costo del acceso para cualquier persona que habite en ella respecto del que paga cualquier usuario en la Capital Federal o en la Patagonia.

Objetivamente, debemos reconocer que en nuestro país existen precios diferenciales de acceso al gas, en función del lugar de radicación de los habitantes. Esto se puede expresar en la siguiente circunstancia: existen 450 mil habitantes en la Patagonia que tienen, a través del fondo fiduciario del gas que se establece con una recaudación del 7,5 por ciento del valor en boca de pozo, un financiamiento que hoy oscila entre 160 y 200 millones de pesos, según el nivel de facturación respectivo.

Por otro lado, la ley 25.561, con la extensión prevista por la ley 25.790 en materia de emergencia y, fundamentalmente, por la ley 25.820 en materia de renegociación de contratos, establece claramente la desindexación y la desdolarización de las tarifas. Por lo tanto, estamos ante tarifas congeladas para aquellos usuarios de red de gas domiciliaria. Ambos precios no son compatibles con personas que realmente no acceden a la red domiciliaria del gas, tanto en Buenos Aires como en otros lugares donde acceden muchas otras y, fundamentalmente, determinado tipo de provincias como las nuestras.

Las estimaciones indican que de un total de 10.000.000 de hogares en la República Argentina, pueden acceder al gas licuado de petróleo entre 3.700.000 y 4.500.000, de los cuales en la provincia de Buenos Aires existe aproximadamente un millón.

Por supuesto, esto requiere una visión de carácter integral y una determinación efectiva del costo para establecer los mecanismos de equiparación respectivos.

De modo tal que cuando uno analiza las profundas asimetrías respecto de la accesibilidad a este insumo básico y estratégico y los precios diferenciales que se pagan en distintos lugares del país, obviamente puede determinar cuál es el poder adquisitivo de referencia para cada persona, independientemente de la composición de su nivel de acceso.

En tal sentido, uno se puede plantear alternativas como las que nosotros nos estamos planteando. Es decir, fijar un marco regulatorio o establecer un precio de referencia, formado por la diferencia que puede darse entre la fijación de lo que se denomina *export parity* menos las exenciones como un precio de referencia interno. Otra modalidad es fijar un precio de referencia sobre la base de lo que determine la autoridad de aplicación, con el objeto de reducir el costo de acceso de los consumidores en determinado tipo de lugares o zonas geográficas.

También se puede establecer una reducción de las distintas partes, porque sabemos que existen alrededor de ocho productoras de gas licuado de petróleo, de acuerdo con las estadísticas de 2001. Y tenemos un ensanchamiento en la base de fraccionadores, que pueden ser cerca de doscientos, avanzando hasta tener entre 50.000 y 100.000 comercios que efectivamente distribuyen el gas a lo largo y a lo ancho del país. A su vez, tenemos múltiples precios de gas licuado de petróleo, en función de la localización de cada habitante que demanda. Por ejemplo, en mi provincia podemos tener desde 25 hasta 35 pesos o incluso 45 pesos si se trata de la localidad de El Sausalito, ubicada a 600 kilómetros de Resistencia, dado que el costo de transporte y comercialización es muy grande.

Entonces, uno se debe preguntar cuál es el consumo más o menos promedio de un hogar que consume gas licuado de petróleo. Normalmente, puede consumir alrededor de diecinue-

ve garrafas, que equivalen más o menos a 241 metros cúbicos promedio de red de gas. Recordemos que la red de gas domiciliaria tiene un consumo de 1.000 metros cúbicos por año.

Entonces, si uno toma como base de referencia a 19 garrafas y las multiplica por 25 pesos, llega a un valor promedio anual de 450 pesos que, convertido a precios relativos, significa tres ingresos del Plan Jefas y Jefes de Hogar durante un año. Es decir, nosotros planteamos que un beneficiario del Plan Jefas y Jefes de Hogar pasaría a cobrar nueve meses en el año, porque los otros tres los destinaría estricta y exclusivamente al pago del gas, si lo tiene que ocupar como elemento de cocción de sus alimentos. Frente a ello, uno puede tomar las alternativas de 13,33 o 8,60 para morigerar el efecto en el ingreso: si paga 13,33 requeriría de 253 pesos al año y si paga 8,60 gastaría 165 pesos al año. Pero lo más importante es que si hacemos la conversión a metros cúbicos de la red de gas domiciliario gastaría cerca de 112 pesos por año, un cuarto promedio de un usuario de Capital Federal.

Nosotros tenemos que reconocer que este mercado ha generado precios diferenciales con profundas asimetrías según sea la ubicación del habitante. La solución no es sencilla porque esto hay que enmarcarlo también dentro de la evolución de la demanda de gas en el contexto nacional e internacional. Uno puede determinar que no existe un precio de referencia del gas ni en Europa ni en los Estados Unidos comparativamente con la Argentina, ya que habría que analizar exactamente la conversión entre reservas disponibles de gas y exploración y explotación anualizada. Obviamente, si no se invierte en exploración para explotar más ello implicará la caída de las reservas. Consiguientemente, nosotros debemos tener en cuenta no solamente el problema que se nos presenta hoy, sino también el flujo de abastecimiento futuro. Por lo tanto, cualquier mecanismo regulatorio en los precios puede incidir en la visión estratégica de la producción anual de gas.

Esto nos debe remitir a la ley 24.076, que es la que regula el sistema de transporte y comercialización de gas, y al marco de renegociación global de los contratos para garantizar reglas de juego que permitan incrementar el nivel de inversión en exploración y en explotación, las que

dependen de varios factores: por un lado, del precio de referencia; por el otro, de las condiciones objetivas del desenvolvimiento del mercado y, por último, de la productividad de cada pozo encontrado.

A partir de la década del 70 y en función de la explotación del Yacimiento de Loma de la Lata hemos tenido un incremento sustantivo de la oferta de gas. A su vez, hemos tenido un fuerte nivel de vínculo con la hermana República de Chile en materia de exportación, a través de la producción de gas por vía de gasoductos. Pero nosotros debemos encarar en nuestro país una redefinición de la política gasífera que nos permita establecer reglas de juego claras con el objeto de incrementar sistemáticamente el nivel de oferta, porque la demanda creció 49 millones de metros cúbicos desde 1993 y está proyectada en 116 millones, con un pico de demanda en el mes de julio, estimándose que crecerá hasta 160 millones en el año 2008 o 2009, lo cual va a requerir de un incremento de la capacidad instalada de transporte y del nivel de exploración porque, si no, la relación entre explotación y reservas se reducirá sustancialmente en términos anuales.

Ultimamente hemos recurrido a la suscripción de acuerdos adicionales con Bolivia y a la expansión del gasoducto del Norte que provee 20 millones de metros cúbicos adicionales. Además, existen perspectivas para incrementar la oferta y sustituir el problema del abastecimiento del gas licuado de petróleo con redes de consumo domiciliario, lo que permitiría incrementar sustancialmente el poder adquisitivo en muchas provincias argentinas, entre las cuales están Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

Por lo tanto, nos parece muy importante trabajar sobre tres temas que han sido abordados en este proyecto de ley. En primer lugar, sobre la reducción de la alícuota del IVA al 10,5 por ciento, que provocará un efecto respecto del nivel de precios comercializados; en segundo término, respecto al fondo fiduciario y su estructura de financiamiento. Me parece que la estructura de financiamiento está definida en términos generales, pero hay que identificar que no se va a poder subsidiar todo el precio, porque si uno subsidia todo el precio y todo lo que se pretende subsidiar para garantizar un precio

homogéneo en todo el país, la inversión total requeriría cerca de mil millones de pesos, lo cual implica adoptar una estrategia que permita definir con precisión cuál es el monto total del fondo fiduciario y cómo se distribuye parte de los recursos del fondo a los efectos de garantizar un subsidio que beneficie principalmente a las garrafas de diez kilos.

En este contexto –sé que mi tiempo ha expirado– quiero decir que la filosofía de este proyecto es muy buena, porque establece un marco regulatorio de carácter general para la producción y distribución del gas licuado de petróleo; establece transparencia en todo el proceso de producción, comercialización, fraccionamiento y distribución; crea un fondo fiduciario con el objeto de establecer un mecanismo de financiamiento para un subsidio de carácter explícito; establece un mecanismo para la fijación de un precio de referencia con el objeto de disminuir el valor final del precio a pagar por cada una de las familias o personas que acceden a este beneficio. Más allá de todo ello, innegablemente es necesario establecer este marco regulatorio –y por eso me parece muy atinada la posibilidad de que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Energía–, porque en el nuevo contexto macroeconómico del país, en el marco de la ley 25.561 y de la determinación de que el precio de los bienes y/o servicios están en directa relación con la competitividad sistémica de la economía, es muy bueno establecer mecanismos y sistemas de incentivos claros y transparentes con el objeto de que no exista una profundización en la distorsión de la estructura de precios.

Por lo tanto, acompaño este proyecto. Creo que en la discusión en particular se pueden mejorar algunos aspectos de la redacción de estos artículos, pero entiendo claramente que el problema de carácter estructural a abordar por nuestro país consiste también en la discusión de un marco regulatorio general para los servicios públicos. No se trata de un servicio público, pero sí de una regulación adecuada en los procesos de fraccionamiento, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo. Me parece muy importante la estructuración del sistema de producción de gas como asimismo la posibilidad de pensar que en el largo plazo la solución radicaría, precisamente, en no tener precios diferenciales entre distintas zonas del país que pro-

vocan asimetrías y un mecanismo no equitativo en la distribución del ingreso.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. – Señor presidente: más allá de los avances que implica regular una actividad como esta, básicamente creo que la ley viene a dar una respuesta concreta a lo que a partir de una posición dominante de mercado se constituyó en el abuso del abuso. En épocas normales de la economía, cuando existen posiciones dominantes, existen también ciertas tendencias a generar abusos. Ahora bien, haber realizado el abuso que se realizó con el precio del GLP o con el gas en garrafa en la peor etapa de la historia económica argentina es hacer un abuso del abuso. En este sentido creo que los que tienen posición dominante en la producción de gas natural están utilizando el precio del gas en garrafa para subsidiar sus bajas utilidades en la producción de aquel, por lo menos hasta que, como decía el senador Fernández, la tarifa de gas natural tienda a un valor acorde con la relación de paridad cambiaria que tenemos. Ante esto, el Congreso está hoy tratando de romper una cadena de abusos que castigó sin duda a las regiones más pobres del país. Quería dejar constancia de esto porque no es menor el enojo que ocasiona.

Si miramos el informe que presentó el ombudsman de la Nación respecto del precio, decir que se exporta a China a 15 centavos de dólar el kilo, y que por el precio interno los productores están recibiendo 31 centavos de dólar por kilo. Me parece que es realmente tomarle el pelo a la gente que tiene necesidades y que son parte de un mercado cautivo.

Por lo tanto, la regulación se constituye en una necesidad que está enmarcada en una cuestión social de la Argentina, y en base a esto y a la ley que hoy tenemos, debemos tratar de ser cuidadosos, porque según como está planteado el estado de cosas, no resiste una discusión doctrinaria entre servicio público sí o no. El problema que tenemos es social. Entonces, las discusiones doctrinarias pueden caer en el vacío. Me pregunto si en El Impenetrable chaqueño, en lo esteros del Iberá o en el medio de la selva de Misiones alguien declara servicio público y establece precios y regulaciones que no pueden ser cumplidas, ¿quién las va a cumplir? El servi-

cio no lo va a prestar nadie porque el Estado tampoco está en condiciones de prestarlo. Entonces, establecer categorías, catalogar o etiquetar, puede terminar siendo una trampa en la cual nosotros mismos le pongamos a la gente un corsé en el cual ya no tenga gas caro, sino que no tenga gas. Sostengo que las dos cuestiones básicas que existen para rescatar este proyecto de ley son esenciales en la cuestión; ellas son seguridad y el fondo fiduciario.

Señor presidente: lo que necesitamos para salir de esta trampa en la que nos pusieron es que se construyan redes de gas, no sólo gasoductos troncales sino redes de gas. Y éste es el aporte básico y esencial que hace esta iniciativa a la gente que hoy necesita mejor calidad de vida y acceso a mejores precios para mejorar su poder adquisitivo.

Interpreto que este proyecto de ley tiene un objetivo central a atacar y es la constitución de este fondo fiduciario.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Ríos. – Para mí es el punto más importante y relevante que se pueda obtener.

Este fondo fiduciario tiene cuatro fuentes, de acuerdo a lo que decía el miembro informante. Si bien esta Cámara no lo puede imponer por razones constitucionales, espero que la Cámara de Diputados —que va a actuar como revisora— disponga que los usuarios de gas natural hagan efectivamente un aporte a este fondo fiduciario. Creo que tiene que existir un aporte de los usuarios de gas natural de todo el país que hoy tienen la ventaja de contar con gas a mejor precio, un gas casi subsidiado, pues se ha mostrado como una muestra de abuso del abuso en las regiones más pobres. Este es uno de los conceptos más claros que tiene que aportar la Cámara de Diputados a este proyecto de ley: que los usuarios de gas natural nos aporten, nos den una ventaja para poder acceder al mismo servicio y calidad de vida que hoy tienen. Ello no significa una imposición, sino una razón de estricta justicia.

Por ello debemos acelerar el tratamiento de este proyecto de ley y no buscar mayor profundidad de análisis. La regulación por la regulación misma no va a mejorar el estado de condi-

ciones que tenemos en el mercado, el que se ha desarrollado de una manera absolutamente desordenada. Una sola ley no la va a imponer; la autoridad de aplicación no la va a poder imponer en el corto plazo. Insisto, si queremos solucionar el problema de gas, que genera asimetrías extremadamente grandes, nuestra apuesta es a la inversión en gasoductos y en redes domiciliarias. Por lo tanto, debemos tratar de hacer el análisis de este proyecto de la forma más acelerada posible y no tomarnos tiempo porque ello repercute en contra de los tiempos que hoy tiene la gente pobre de la Argentina.

Señor presidente: respecto de los parámetros de fijación de precios, que considero es uno de los puntos más álgidos de esta cuestión, quiero mencionar como anécdota lo siguiente. La garrafa social que generó el gobierno nacional venía a poner coto a su precio, favoreciendo así a la gente más necesitada. Pero el problema es que la garrafa de catorce pesos no existía en el interior de la provincia de Corrientes. Entonces, las regulaciones de precio, o este tipo de maniobras que tratan de que el Estado influya de alguna manera en el mercado, no tiene incidencia alguna en las regiones más alejadas del país. Insisto en que la única forma de igualar es que todos tengamos la misma calidad de vida; no hay otra manera; no se lo puede hacer desde una cuestión semántica, sino solamente desde la acción concreta.

Por lo tanto, debemos avanzar en este marco regulatorio y sostener esta etapa de transición del mejor modo posible, tratando de afectar de la menor manera la capacidad adquisitiva de la gente del Norte —principalmente del NEA— y, sobre todo, impulsar fuertemente el fondo fiduciario, que será una de las herramientas más trascendentes con que pueda contar esta gente para acceder al gas natural.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor Prades.

Sr. Prades. — Señor presidente: sin perjuicio de ratificar los conceptos vertidos por el miembro informante de nuestro bloque, es dable señalar algunos aspectos referidos al proyecto en tratamiento.

No caben dudas de que la discusión acerca de si se trata de un servicio público o no, no traerá la solución a los legítimos destinatarios de este proyecto de ley. Pero creo, y así lo se-

ñalan los principales doctrinarios de nota en materia de derecho administrativo, que el concepto de servicio público es mucho más omnicomprendivo, abarcativo y laxo que el que contiene el dictamen en mayoría. De todos modos, ello será materia de debate en el momento de la discusión en particular.

También quiero señalar —y esto a título personal— que tampoco caben dudas —así lo señaló el señor senador por la minoría de la provincia de Santa Fe— acerca de que esta materia tiene un marcado sesgo oligopólico, a punto tal que es cierto que el 78 por ciento de la posición dominante lo poseen diversas empresas petroleras.

Pero hay un tema que creo que no puede escapar al análisis y mérito de todos los señores senadores. Voy a referirme al artículo 46 del proyecto de ley, que no sé si sufrió modificación ulterior a lo emitido por la Dirección de Publicaciones en el Orden del Día.

Me parece que el abuso que se está dando en la creación de los fondos fiduciarios no se puede parangonar con respecto a la situación que vive el país y a la necesidad de transparencia. La ley 24.441 ha establecido los fondos fiduciarios, pero su creación ya se está haciendo un deporte. En efecto, hace unos días, el Poder Ejecutivo, haciendo abuso de esta figura, dictó el decreto 906/2004 por el que se faculta a dos ministros del Poder Ejecutivo a asignar, reasignar o disponer de fondos conforme una discrecionalidad que no se compadece con un sistema republicano de gobierno.

En tal sentido, acompañado por el resto de mi bloque, presenté un proyecto de ley tendiente a derogar ese decreto, que facultó a dos ministros a disponer de más de 3.500 millones de pesos, sumado ello a otros fondos fiduciarios que desconocemos y que se han ido constituyendo durante el año.

Creo que esta marcada acentuación —o, por lo menos, exteriorización de distintos miembros del gobierno respecto de la transparencia— no se condice con estos decretos que sucesivamente está dictando el Ejecutivo y que discrecionalmente —diría que arbitrariamente— están facultando a los ministros de Planificación y de Economía a una reasignación a su gusto para distintas obras públicas. Eso no sólo contradice al sistema republicano de gobierno, sino que,

además, atenta clara y flagrantemente contra las autonomías provinciales y contra el federalismo, que está consagrado como forma de gobierno en la Constitución Nacional.

En su momento, en oportunidad de la consideración en particular, voy a señalar clara y concretamente cómo se han dispuesto esos fondos fiduciarios. Obviamente, voy a probar las enunciaciones que estoy haciendo en este momento.

Además, y en nombre de la Unión Cívica Radical, queremos que rápidamente se sancione esta proyecto de ley, porque en definitiva viene a poner, después de muchos años, un punto final a una cuestión que en realidad ha sido dejada al criterio y al arbitrio de un puñado de sujetos, atentando contra la gran o inmensa mayoría de la gente menos pudiente del país. Pero ¡jojo!, que querer llegar a la protección eficaz del Estado respecto de los más pobres de la Argentina no implique la viabilización o la utilización de argucias legales para manejar fondos discrecional o arbitrariamente en contra del sistema republicano de gobierno y, fundamentalmente, del sistema federal que establece nuestra Constitución Nacional.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Falcó, por Río Negro.

Sr. Falcó. – Señor presidente: en realidad, me encuentro satisfecho, porque uno de los proyectos de mi autoría, junto con otros de seis senadores, hoy están en debate, después de un pormenorizado y concienzudo análisis en la Comisión de Energía.

De hecho, ha llegado al recinto un tema que es medular para los argentinos, una deuda pendiente que tenía este Poder Legislativo con los argentinos más necesitados.

Voy a votar el dictamen afirmativamente en general, porque lo comparto en un 90 por ciento. Pero después de aportar este granito de arena, me caben algunas preguntas que me parece que son fundamentalmente el meollo de la cuestión.

En primer término, por qué hay diez millones de argentinos que tienen necesidades apremiantes de este bien esencial como es el gas licuado de petróleo y este bien social básico tiene declaración de interés público cuando los habitantes del Barrio Norte están protegidos con provisión de gas natural y tienen un servicio público. Hay una diferencia fundamental. No voy a ha-

cer una diferencia ni semántica ni lírica. Desde el sentido común, creo que no necesitamos declararlo de interés público porque la necesidad social de diez millones de argentinos es de interés público, nos guste a los senadores o no, lo declaremos o no.

De hecho, existe una obligación indelegable del Estado nacional. Fíjese que digo Estado nacional no gobierno nacional. Tampoco deberíamos confundir el Estado nacional con el gobierno ni al gobierno con unos pocos, porque si no, seguramente nos equivocáramos.

El senador por Jujuy decía que el Estado nacional debe regular, que debe proteger, que debe tipificar la provisión de un bien elemental como el gas licuado de petróleo. Pero acá no se trata solamente de las regiones del Noroeste y del Nordeste. De hecho, en la Patagonia también hay un sinnúmero de habitantes que utilizan el gas licuado de petróleo porque no tienen acceso a las redes de gas natural.

Me parece que, por una cuestión de sentido común, el Estado nacional tiene la obligación indelegable de asegurar que este servicio para diez millones de argentinos tenga las mismas características que la provisión de agua potable, de energía o de gas natural.

Junto con otros senadores, presentamos hace más de un año proyectos que tendían al financiamiento de la construcción de gasoductos, con impuestos sobre el gas natural y con fondos fiduciarios recaudados de la retención a las exportaciones de hidrocarburos. Con un porcentaje ínfimo, se financiaba la construcción de gasoductos y redes para que todos los habitantes de la Nación tuvieran provisión de gas natural.

Nos hubiera gustado que fuera un servicio de responsabilidad del Estado nacional. Quizás esto no hubiera sucedido si los recursos energéticos de carácter estratégico para la Nación fueran manejados por la Nación. Tal vez lo actuado en la década pasada fue un exceso de *aggiornamento* a la globalización y hoy, los argentinos necesitados están pagando las consecuencias de que la Nación no pueda manejar estratégicamente los recursos que necesitan.

También nos hubiera gustado que las siete u ocho empresas que producen el 80 por ciento de los hidrocarburos sean consideradas, por lo menos, oligopolio. Si no, no sé de qué manera llamarlas. Se trata de un mercado oligopólico.

Además, como la propiedad de la garrafa está en manos de las 100 distribuidoras de las que se hablaba hoy, el mercado no sólo es oligopólico sino dependiente. La propiedad de las garrafas va a depender de la distribuidora que las proporciona. Si ésta no las proporciona, el más necesitado no va a tener provisión de gas licuado de petróleo.

Les quiero contar lo que pienso analíticamente de los fondos fiduciarios. Me gusta un fondo fiduciario que se recaude, que se administre y que pague; que no cree problemas a la Nación, a las provincias ni a los municipios; que llegue a la gente y no haya remanentes de 60, 70, 300 o 1.000 millones de pesos que, en última instancia, no le llegan.

Creo que hoy estamos dando un paso adelante. Muchas veces, para lograrlo, hay que subir dos escalones y bajar uno. Pero nos queda una pequeña deuda pendiente en cuanto a las responsabilidades indelegables del Estado nacional que es, en este caso, el que tendría que tener el recurso, su manejo y la distribución de un bien tan esencial para los argentinos necesitados.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por el Chubut, para cerrar el debate.

Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad, hay muchas cosas que nos gustarían y hay otras que se pueden hacer.

En principio, cuando observamos la manda del artículo 87 de la ley 24.076, el marco regulatorio del mercado gasífero, la primera pregunta que surge es ¿por qué se concede tanto tiempo para cumplir con la disposición legal de regular el GLP? La respuesta parece bastante obvia. Más allá de alguna preocupación legislativa, en realidad, había estabilidad cambiaria y no había o no se habían evidenciado accidentes que hicieran tomar conciencia de la necesidad de legislar rápidamente sobre este marco regulatorio. Obviamente, el apuro empieza con la salida de la convertibilidad y con el hecho de encontrar desregulado el elemento primigenio de la cadena de formación de precio, que es el gas.

Vale decir, la materia prima está desregulada y, obviamente, al salir abruptamente de la convertibilidad, nos encontramos con la tremenda obligación de regular ese mercado. ¿Pero hay que regularlo o no hay que hacerlo? Sí y no sólo

por una manda legal, sino porque, en realidad, hay una obligación de orden social que así lo exige.

El artículo 87 de la ley 24.076, que dice que el marco regulatorio de la actividad del gas licuado será motivo de una ley especial, en realidad, declaraba claramente el interés público del Estado en que se regule esta actividad. Y esta norma, vigente desde 1992, regula el transporte y distribución de gas natural constituyéndolo en un servicio público nacional, y en lo que hace a la producción, captación y tratamiento será regido por la ley 17.319. Esto implica que hay limitaciones en cuanto al avance en el marco normativo.

El marco regulatorio, que se trata desde junio de 2002 –así lo indican los antecedentes legislativos–, ha sido largamente debatido y tratado por todos aquellos que evidenciamos interés en el tema.

La ley 24.076 sólo definió como servicio público las etapas de transporte y distribución del gas y dispuso entonces que la producción, captación y tratamiento del gas se rigieran por la Ley de Hidrocarburos y que la actividad de GLP contara con un marco regulatorio especial. Ello parecía una consecuencia lógica de que el transporte y la distribución del gas natural eran una actividad monopólica en manos de una empresa nacional privatizada –Gas del Estado–, en el marco de ley 23.696.

¿Se puede regular? Obviamente que sí. El GLP, gas licuado de petróleo, butano o propano, envasado a alta presión, representa un mercado cuya franja de consumo domiciliario vendido en garrafas y otros envases que tiene como destino la provisión de gas provee a más de cuatro millones de hogares argentinos. Pero en realidad, es un sector de la industria que exporta el 60 por ciento de la producción y de cuyo resto, el 70 por ciento lo destina al consumo domiciliario –más de cuatro millones de hogares argentinos– y el otro 30 por ciento lo destina a la industria y a la petroquímica.

Es decir que se trata de un sector de la industria hidrocarburífera que debe regularse, aunque teniendo claramente en cuenta las condiciones del mercado que, también es cierto, corresponde a un bien transable –no utilizaré la expresión en inglés– que cada vez tiene más mercado, porque la pobreza alrededor del país

se ha expandido, lo cual le abre muy favorables expectativas.

Luego de analizar la importancia económica y social del GLP y considerada realmente la posibilidad jurídica de su regulación, al observar sus antecedentes, advertimos que tanto en materia de servicios públicos como de otras actividades que se consideraba necesario regular, nuestro país no tenía, previo a la ley 23.696 ni aún luego del decreto de desregulación conocido como decreto Domeniconi, regulación sobre esta materia.

En consecuencia, la actividad del GLP se puede y se debe legislar y regular, en función de la naturaleza de los derechos de los consumidores. Esto es así porque –en mi criterio– no se está ante un servicio público, sino –algo más complejo aún– ante un bien social. Entonces, es absolutamente necesario que el Estado regule esta actividad y tenga al respecto una posición muy activa.

Creo que el proyecto en consideración es un avance importante. Incluso, tiene diferencias con lo que fue mi proyecto original, sobre el que trabajaron algunos diputados a partir de junio de 2002. En mi iniciativa, se fijaba una limitación en la integración vertical de la actividad. En realidad, la autoridad de aplicación podrá fijarla –y creo prudente que lo haga– después de un estudio serio y pormenorizado del mercado. Ahora, aparece una norma que le da ciento veinte días para que haga y realice esta tarea.

En realidad, tenemos que regular en función de la defensa de los derechos de los consumidores; de la trascendencia del consumo residencial del GLP y de los fundamentos constitucionales de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, relacionados con la necesidad de preservar el medio ambiente, la salud, la seguridad y la salubridad.

Es decir que estamos –como diría Gordillo–, con posibilidades de regular dentro de lo que es el umbral mínimo previsto en la Constitución Nacional. Obviamente, esto debe hacerlo el Poder Legislativo.

Por eso, considero que el marco regulatorio es una legislación adecuada que toma todas las etapas –desde la producción hasta la comercialización– y que va teniendo pormenorizadamente legislación en el tema de los envases y del acceso abierto al almacenaje. Algunas nor-

mas son de avanzada y otras han sido mínimamente reguladas por la Secretaría de Energía a través de un mecanismo que resulta impropio, porque es tarea del Congreso de la Nación legislar y regular en esta materia.

Cuando en el Congreso Nacional se trató el artículo 87 de la ley 24.076, el diputado Bordín Carosio decía: “...El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley de marco regulatorio de la actividad del gas licuado, en un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Nosotros proponemos la eliminación de este artículo porque pensamos elaborar desde la Comisión de Energía y Combustibles, un proyecto regulatorio de la actividad del gas licuado, como corresponde. Además, en el marco regulatorio del gas natural no podemos mezclar el tema del gas licuado, así como tampoco debemos dar al Poder Ejecutivo una atribución que corresponde al Poder Legislativo”.

El diputado Natale decía: “Políticamente tienen razón los diputados que están pidiendo que se incluya alguna disposición de este tipo dentro del proyecto... Pero jurídicamente tienen razón los diputados que sostienen que carece de toda entidad una norma de este tipo, que no va a producir efectos de ninguna naturaleza, porque existen numerosos antecedentes de encomiendas de esta índole al Poder Ejecutivo que se han cumplido”.

El diputado Nicolás Becerra decía: “La sanción del proyecto de ley de marco regulatorio de gas en la República Argentina contiene una grave deficiencia. Dejará sin amparo legislativo a cerca de 4 millones de personas, y en su inmensa mayoría pertenecientes a los sectores más carenciados”.

Es decir que todos asumimos que debemos regular. Pero cuando se trata de definir qué es un servicio público, no encontramos una sola norma de nuestro derecho positivo que lo defina.

Como dice Renato Alessi, existen tantos conceptos de servicio público como autores se han referido al tema. Sarmiento García, en su obra “Concesión de servicios públicos” sostiene que la noción de servicios públicos tiene como elementos esenciales “...el sujeto que lo presta. La actividad de marras es desarrollada por entidades estatales o por su delegación, en este último caso bajo el control de aquellas”.

En realidad, una importante mayoría de la doctrina nacional menciona como características esenciales y clásicas del servicio público las siguientes: la declaración por ley formal de la calificación de pública de la actividad, lo que supone el reconocimiento de la titularidad estatal sobre ella.

Sólo por una decisión de la administración y mediante una de las formas previstas para la gestión indirecta, por sí o por alguien a quien delega, puede ser ejercida esta actividad por los particulares, los cuales se convierten en gestores de una actividad originaria y primariamente estatal. El Estado sigue conservando el poder de dirección y control sobre la actividad y sobre la empresa. El gestor de un servicio público está obligado a mantener en todo momento la continuidad y regularidad en su prestación, lo cual entraña una serie de peculiaridades en su régimen jurídico. La administración que ostenta la titularidad sobre la actividad y asume su dirección, no puede dejar de asumir también la responsabilidad última del servicio.

El maestro Gordillo –citado parcialmente– decía que la regulación se manifiesta a través de dos mecanismos: uno, el denominado servicio público y el otro, el llamado actividad regulada. Y continuaba diciendo que el nudo de la cuestión no está en que decidamos colectiva o individualmente, por un acto mágico de voluntad, llamar servicio público y luego deducir algo de ello. El verdadero debate es decir qué tipo y cantidad de regulación el orden jurídico ha establecido –y nosotros como sociedad postulamos–, para qué tipo de actividad, en qué tiempo y lugar y en qué estadio tecnológico.

Nosotros sostenemos que si bien la industria de GLP estuvo parcialmente, en algún momento, monopolizada por el Estado, hoy, en realidad, por la propia composición del mercado tenemos un mercado de competencia imperfecta. En realidad se trata de un oligopolio de manejo cartelizado; creo que esto lo reconocemos absolutamente todos. Ello de por sí justifica la regulación.

He analizado algunos proyectos, entre ellos el inicial de la senador Curletti, que ni siquiera –y creo que con buen criterio– establecía si se trataba de un servicio público o no; pasaba directamente a regularlo. Yo creo que eso es lo que realmente corresponde teniendo en cuenta el concepto tradicional con el que nosotros defi-

nimos clásicamente el servicio público. Esto viene del derecho francés –lo dice el mismo Gordillo–; lo hemos asimilado en nuestras instituciones pero, en realidad, parece difícil darle hoy este marco a una actividad manejada por operadores privados.

Analizando nuestro derecho positivo, cuestiones como la energía o el gas se encuentran bajo diversos regímenes jurídicos; en cuanto a la energía, su generación es virtualmente de libre competencia y no necesita autorización previa ni se encuentra regulada como servicio público. Con relación al gas, su producción extractiva participa de la misma naturaleza jurídica que la generación de energía: desregulada y de libre competencia. El transporte y distribución de ambos está regulado como servicio público y es objeto de concesión. Inclusive las concesiones en materia de distribución de energía eléctrica son generalmente de orden local: provincial o municipal. El tema es arduo y realmente complejo.

El monopolio y la ausencia de libre competencia es lo que puede determinar la mayor o menor necesidad de regulación, y en función de ello establecer si cabe avanzar en un máximo de regulación y cómo calificarlo.

No obstante, en esta situación en la que el servicio de GLP se está prestando en el país, no cabe duda de que el proyecto de dictamen ha sesgado inclusive algunas cuestiones de los proyectos originarios, como es el caso de la integración vertical. Nosotros le asignábamos un porcentaje a la integración vertical. Entiendo que, con buen criterio, la autoridad de aplicación y el Tribunal de Defensa de la Competencia tienen 120 días para manejar ese porcentaje que pueden fijar en cuanto a integración vertical. Existen empresas que, obviamente, también están integradas horizontalmente en el mercado, por lo cual, reitero, la cuestión es muy compleja.

Si calificáramos esta actividad como un servicio público en todas o algunas de las etapas de la actividad productiva de comercialización del GLP, en realidad deberíamos asegurar, desde el inicio, la continuidad del servicio en forma genérica y previa; establecer que la fuerza pública preste un apoyo especial para su prestación al titular de ella; otorgar derechos al titular prestador del servicio para solicitar al Estado que éste expropie bienes útiles a su gestión; que

pueda establecer servidumbres y restricciones al dominio privado; que los contratos que suscriba el particular con relación a la prestación del servicio dejen de tener una naturaleza de derecho privado y pasen a ser contratos administrativos; y, obviamente, como han expresado algunos senadores preopinantes, que el monto de las tarifas, precios o tasas estén sujetos a la autorización del poder público, previa audiencia también pública, bajo pena de nulidad.

La regulación siempre debe estar en cabeza del Congreso Nacional. En este marco regulatorio no se puede aprobar una ley de pocos artículos que efectúa excesivas delegaciones en el Poder Ejecutivo, porque ella sería una delegación reñida con la Constitución reformada en 1994.

Sinceramente, creo que este proyecto puede mejorarse, pero tiene aspectos importantes. Considero que el concepto de actividad regulada, tal como está tomado –asimilado virtualmente a un servicio público, que hoy podría denominarse impropio–, está bien definido.

En definitiva, como bien dice Gordillo, la determinación de aplicar un régimen de derecho público a cierta actividad estatal o no, es una decisión que no puede estipular libremente la doctrina a partir de la afirmación que resuelva hacer en el sentido de llamarla servicio público. Esa determinación, afirma Gordillo, está dada por el orden jurídico en la medida en que, efectivamente, someta o no, en mayor o menor grado, alguna actividad humana al derecho público. Que alguien la llame servicio público antes de existir la regulación legal del derecho público, expresa sólo una opinión personal de que convendría que esa actividad fuera objeto de regulación por parte del derecho público. Las clasificaciones y definiciones –termina diciendo el citado autor– deben servir para explicar el derecho positivo y no pueden ser abstracciones sin referencia empírica alguna en el derecho vigente. En tal caso, no son útiles.

Señor presidente: creo que este proyecto avanza positivamente en varios aspectos de la regulación. Sería pesado que los describiera, razón por la cual voy a pedir la inserción de los aspectos que han sido regulados en esta norma, en la regulación técnica por segmentos de la actividad que se realiza, en la regulación de la producción, del fraccionamiento, del transporte, de la distribución, del almacenaje con acceso

abierto, de la comercialización, de los precios de referencia para uso domiciliario; en el marco de una política de mercado y con un fondo fiduciario.

En realidad, creo que se están dando herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda intervenir en un mercado complejo, donde no sólo se afecta a un sector de la industria que –insisto– exporta el 60 por ciento, mientras que del 40 por ciento restante, el 70 por ciento se utiliza para el mercado doméstico y el resto se destina a la industria o a la petroquímica. Entonces, se necesita un marco regulatorio general y, muy posiblemente, también una legislación específica en lo que respecta al mercado doméstico de la garrafa.

Cuando se definen precios de referencia, en realidad se intenta poner como techo la variedad de exportación y utilizar algunos mecanismos de regulación que tenemos en la actualidad, como son las retenciones, para definir el costo interno y algunos mecanismos de estabilización que están previstos en el proyecto de ley y que fueron utilizados en el caso del petróleo. Asimismo, el fondo fiduciario establece algunos subsidios que, en realidad, deberían estar destinados a la extensión de redes de gas, a fin de evitar que se estire o se agrande el mercado del GLP para que no se produzcan tensiones internas. Es muy claro que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para extender las redes de gas domiciliario para todos los hermanos que pueblan nuestro suelo. Eso es absolutamente cierto.

En lo que se refiere al impacto del IVA en el precio del GLP al consumidor, se trata de una cláusula que, en función de atribuciones que le son propias, va a introducir la Cámara de Diputados, ya que es quien tiene atribuciones para hacerlo, porque se ha hablado de este tema y porque a pesar de las dificultades que importa este tipo de decisiones en la legislación fiscal, es cierto que es preciso compartir esfuerzos entre las empresas del sector y el Estado, dadas las condiciones de bien social del tema en discusión.

Además de establecer un marco regulatorio general sobre la actividad, el aporte del Estado debe pasar por disminuir el costo final del bien para las familias. Y esa disminución también se logra disminuyendo el impacto de los impuestos

indirectos, no sólo el IVA –que tiene carácter nacional– sino también el impuesto a los ingresos brutos, tanto a nivel provincial como municipal. El IVA es un impuesto neutro en su traslación en la cadena de producción y distribución; en realidad, la redacción de la cláusula debería ser impulsada hacia la disminución de la tasa general del IVA en un 50 por ciento y no poner solamente una alícuota, por la modificación que eventualmente pudiera sufrir la alícuota general.

Creo que también es conveniente que se invite a las jurisdicciones locales para fijar esquemas diferenciales tributarios similares para toda la cadena de fijación del valor del producto en cada jurisdicción, porque estos impuestos caen en cascada sobre el precio final –fundamentalmente, el impuesto a los ingresos brutos, tanto a nivel municipal como provincial– y pueden representar para el costo efectivo real de los consumidores un componente equivalente a la incidencia del IVA que se propone disminuir en la alícuota media.

En definitiva, creo que como toda norma este proyecto puede presentar algunos aspectos discutibles, pero considero que representa un avance significativo tendiente no sólo a cumplir con una manda legal sino también a suplir una regulación que de manera imperfecta venía haciendo lo que en el dictamen se define como autoridad de aplicación. Esta iniciativa tiene herramientas más que suficientes para que el Poder Ejecutivo intervenga en un mercado irregular, oligopólico y cartelizado que, obviamente, necesita de la actividad regulatoria y activa del Estado.

Cierto es que si bien se le dan todas estas posibilidades al Poder Ejecutivo, también deberá afrontar enormes responsabilidades: va a tener que manejar precios de referencia, cortes en la integración vertical de las empresas, sanciones en caso de posición dominante y, obviamente, nosotros vamos a tener la obligación de controlar y demandar que la autoridad de aplicación actúe a fin de aplicar este marco regulatorio, con el objeto de conseguir mayor equidad en un mercado que hasta hoy no la ha tenido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Es para hacer una sola aclaración: si bien vamos a votar en general, el artículo 48 no podrá ser tratado por este Senado, porque tenemos un impedimento constitucional, que es la creación del IVA. Concretamente vamos a tener que hacer un corrimiento, dado que no podemos incluir en este proyecto el actual artículo 48, ya que por él se crea una base impositiva. En efecto, dicha cuestión deberá ser abordada por la Cámara de Diputados. Aclaro esto en función del compromiso asumido de votar en particular el miércoles que viene, de modo que el senador Morales no diga que le cambio las reglas de juego.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – ¿No vamos a tratar la reducción de la alícuota?

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.

Sr. Fernández. – No es que no vayamos a tratar el tema. Sucede que nosotros, pese a la voluntad que tenemos para tratar este proyecto, por un impedimento constitucional no podemos crear impuestos. En consecuencia, esta cuestión deberá ser abordada por la Cámara de Diputados. Si no queremos la nulidad de la ley no debemos nosotros tratar ese artículo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Prades.

Sr. Prades. – Señor presidente: efectivamente, la Cámara de Diputados es la que ejerce la facultad originaria en materia tributaria. Nosotros podemos modificar una cuestión de esa naturaleza si viene en revisión. Por lo tanto, es correcto lo que se afirma.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.

Sr. Guinle. – Efectivamente, hay un compromiso de la Cámara de Diputados de agregar este artículo al proyecto que le será remitido por el Senado. Ellos ejercerán su atribución, tal como ha sido expresado mayoritariamente por ese cuerpo. Obviamente, nosotros tenemos como aporte un texto sugerido que, como dije hace minutos, va a implicar que las jurisdicciones provinciales o locales adecuen su normativa tributaria a este importante aporte que va a realizar el Estado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un compromiso con el bloque de la Unión Cívica Radical de votar este proyecto en general, lo que nos va a permitir en el curso de la semana que viene analizar esta cuestión con detenimiento y definir qué hacemos en el tratamiento en particular.

Por lo expuesto, no creo que sea relevante entrar ahora en esta discusión, cuando lo podemos estudiar con más precisión.

Sr. Presidente. – En primer lugar vamos a votar las inserciones...

Sr. Losada. – Perdón, señor presidente, las inserciones se votan al final del tratamiento, no ahora; es decir, cuando terminemos de tratar el proyecto en particular.

Quiero dejar expresada la absoluta voluntad del bloque radical de votar en la próxima sesión este proyecto, porque nos interesa y ha sido, como bien dijeron nuestro legisladores, preocupación del bloque de la Unión Cívica Radical, así que desde ya asumimos el compromiso de votarlo en particular en la próxima sesión.

Sr. Presidente. – Queda acordado entonces que ahora votamos en general y la semana próxima, en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y uno por la negativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general. El debate en particular se pasa para la próxima sesión.

123

CONCESIONES DE ENERGIA GEOTERMICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Ge-

neral y de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros señores senadores sobre concesiones de energía geotérmica. (Orden del Día N° 786.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Minería, Energía y Combustibles han considerado el proyecto de ley del señor senador Salvatori y otros, sobre concesiones de energía geotérmica (expediente S.-391/03); y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 22 de junio de 2004.

Liliana T. Negre de Alonso. – Nicolás A. Fernández. – Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. – Elva A. Paz. – Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele. – Marcelo A. H. Güimle. – Silvia E. Giusti. – Celso A. Jaqué. – Sonia M. Escudero. – Jorge A. Agúndez. – Roberto F. Ríos. – Ricardo Gómez Díez. – Carlos A. Rossi. – Alicia E. Mastandrea.

DISIDENCIA PARCIAL AL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY S.-391/03

Las modificaciones y fundamentos que a continuación se transcriben tienen por objeto manifestar mi disidencia parcial al dictamen realizado por la Comisión de Legislación General sobre el proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica.

Si bien estoy convencida de la importancia de incentivar la generación de energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos, entiendo que deberían realizarse algunas modificaciones y tener en cuenta las siguientes consideraciones.

En su artículo 1° hace una modificación sustancial al Código de Minería, cuando cambia el alcance de uno de los minerales de primera categoría como son los vapores endógenos. Resulta conveniente que la regulación de este mineral requiera de la consideración de una ley por separado o una reforma integral del código, entre otros motivos por los efectos que produce la actual redacción del proyecto en la exploración y explotación de otros minerales.

Se transcriben con letra cursiva los artículos del dictamen del proyecto de ley y subrayados aquellos párrafos que considero que producen mayores inconvenientes.

¹ Ver el Apéndice.

138
APENDICE
I
VOTACIONES

Votación Nominal

122° Período Legislativo - Ordinario - 19° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
 COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.

ORDEN DEL DIA 619

(S-110/03, S-1494/03, S-291/04, S-1091/04, S-1137/04, S-1330/04 Y S- 1391/04)

VOTACION EN GENERAL

Acta Nº: 1	Fecha: 15-09-2004	Hora: 20:14:38
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI Daniel	Desempate: No	

Presentes Identificados:	53	Votos Afirmativos:	52
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	1
Total Presentes:	53	Abstenciones:	-
Ausentes:	19		
Votos Afirmativos Necesarios:	27	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

122º Período Legislativo - Ordinario - 19ª Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO.

ORDEN DEL DIA 619

(S-110/03, S-1494/03, S-291/04, S-1091/04, S-1137/04, S-1330/04 Y S-1391/04)

VOTACION EN GENERAL

Acta N°:1 Fecha: 15-09-2004 Hora:20:14:38

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI Daniel Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AUSENTE	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANUELA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARRÓS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYAS, José Manuel Angel	AUSENTE
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAYAN, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Della	AFIRMATIVO	MENEN, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AUSENTE	MIRANDA, Julio Antonio	AUSENTE
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AUSENTE
CURLETTI, Miriam Belén	AUSENTE	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AFIRMATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCCHOA, Raúl Ernesto	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AUSENTE	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Della	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	PRADES, Carlos Alfonso	AFIRMATIVO
GIRI, Haidé Della	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AFIRMATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AUSENTE	SALVADORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AUSENTE
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AUSENTE
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE